

**Benito Juárez**

***Documentos,  
Discursos y Correspondencia***

**Tomo 10, capítulo CLVIII**

Selección y notas de  
**Jorge L. Tamayo**

Edición digital coordinada por  
**Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva**

Tomo revisado y anotado por  
**Carlos Sánchez Silva**

Versión electrónica para su consulta  
**Aurelio López López**



**Año 2006**

# **Tomo 10, capítulo CLVIII**

**Anotado y revisado por  
Carlos Sánchez Silva  
(UABJO)**

**con la colaboración de  
Maira Cristina Córdova Aguilar**

## **Capítulo CLVIII**

**Juárez prorroga su mandato**

**Noviembre y diciembre de 1865**

## **CAPÍTULO CLVIII**

### **JUÁREZ PRORROGA SU MANDATO**

**Noviembre y diciembre de 1865**

Según la interpretación que el gobierno había dado en Chihuahua, a fines de 1864, sobre el término del período presidencial de Juárez, señalando que concluía el 30 de noviembre de 1865, el gobierno republicano se enfrentó al problema de que por la ocupación de la mayor parte del territorio nacional por las tropas invasoras, no había sido posible llevar a cabo las elecciones y, por lo tanto, no había persona designada para desempeñar el puesto de Presidente de la República.

La Constitución preveía que al terminar el ejercicio del presidente y si no había sustituto legalmente designado, la vacante sería cubierta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación

El general González Ortega había sido designado en 1861 como presidente de la Suprema Corte pero a fines de diciembre de 1864 solicitó del gobierno autorización para trasladarse a alguna parte del territorio donde pudiera combatir y que, para poder ir con seguridad a la zona que él eligiera, se había trasladado a los Estados Unidos donde permaneció todo el año de 1865.

Juárez estaba indeciso sobre el camino a seguir porque no simpatizaba con la idea de prorrogar su mandato y, a la vez, veía con alarma las repercusiones que pudiera tener el que otra persona le sucediera en el mando y muy especialmente el Gral. González Ortega, de quien tenía mala opinión y lo consideraba incapaz de poder enfrentarse a los problemas y tener suficiente autoridad moral para conservar la unidad de las fuerzas republicanas.

Después de largas y sesudas reflexiones, de haber consultado con los miembros de su gabinete, tomó, finalmente, el 8 de noviembre, la decisión de prorrogar su mandato; para el efecto expidió en seguida un

decreto suscrito también por Sebastián Lerdo de Tejada, como ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. Desde el punto de vista jurídico, apoyaba su decisión en las amplias facultades que le había concedido el Congreso.

Señalaba que su ejercicio se prolongaría hasta que las condiciones de la guerra pudieran permitir una nueva elección constitucional y, a la vez, prorrogaba los poderes de la persona que tenga el carácter de presidente de la Suprema Corte; por la vaguedad de esta referencia, claramente se traslucía que no se trataba del Gral. González Ortega.

Ese mismo día expide otro decreto en el que se declara al Gral. González Ortega responsable del delito de abandono voluntario del cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia y se ordena sea detenido cuando penetre a territorio nacional, en cuyo caso el gobierno dispondrá lo conveniente para que se proceda al juicio en que se deba calificar su responsabilidad.

Indudablemente que estas trascendentales decisiones fueron preparadas con varios días de anticipación, pues de otra manera no se explica cómo fue posible que ese mismo día enviara Lerdo de Tejada una larguísima circular a cada uno de los gobernadores y jefes militares, justificando los dos decretos anteriores y no creemos oportuno sintetizar esta importante circular que es el alegato razonado de los dos decretos anteriores, nos limitaremos a señalar que presenta, con fría objetividad, la grave situación y trata de demostrar que se adoptó la solución más conveniente y que es correcta a la luz de las facultades que considera tiene el Presidente de la República.

Esta decisión tomada por Juárez ha sido una de las que ha provocado largas controversias y discusiones, aun en el seno de los simpatizantes del gobierno liberal y, según algunos, constituye un verdadero golpe de estado.

Mucha tinta ha corrido en esta discusión y no creemos que sea útil que agreguemos más a la ya consumida en la polémica; simplemente nos ha parecido conveniente reproducir cuatro opiniones de escritores de nombradía sobre esta debatida cuestión.

Justo Sierra,<sup>1</sup> dice al respecto lo siguiente:

Mientras llegaba el momento de la pacificación por la retirada de los franceses, no todo se redujo para Juárez a esperar. Tuvo que entrar en una vía de resoluciones delicadísimas. No era jefe dictatorial de aquella República que combatía contra fuerzas abrumadoras; era un presidente constitucional con funciones limitadas y temporales. Ante el peligro de la guerra, las limitaciones de facultades se habían ensanchado. La dictadura legal sucedió a la función propia del gobernante constitucional. Pero la guerra continuaba y el período del presidente acababa. ¿Cómo resolver la dificultad y zanjar el peligro de una acefalía? Hemos dicho, así lo creemos por muchas razones y así lo decía el mismo Juárez, que la causa republicana era más alta que una simple cuestión personal, pero hubiera sucumbido con el presidente; pero esto no impide que la unión legal, bajo una jefatura reconocida y prestigiada, fuese poderoso elemento de cohesión material y de fuerza ante el extranjero. Una conveniencia indudable aconsejaba mantener ese centro por medios constitucionales, si era posible; por medios convencionales, si era necesario.

No es dudoso que Juárez, ante una disposición imperativa de la constitución, se habría inclinado, separándose. Su ambición reconocía limitaciones que la conciencia moral del hombre y el respeto del magistrado a la ley no le permitían violar. Es más: si de su separación hubiera dependido un arreglo notoriamente ventajoso, tanto desde el punto de vista de la dignidad, como de la conveniencia, su ambición personal habría callado. Pero a la vez, la situación parecía aconsejar su permanencia en el puesto de presidente y la constitución, lejos de presentarle un texto que señalase la necesidad legal de separarse, le entregaba a una vaguedad apropiada para todas las libertades de interpretación.

---

<sup>1</sup> Justo Sierra, *Juárez, su obra y su tiempo*, México, 1945, p. 420.

El licenciado Rafael de Zayas Enríquez<sup>2</sup> comenta al respecto:

Estas medidas fueron sabias y patrióticas y, al mismo tiempo, audaces. Las exigía la salud pública, la salvación de la patria, que importaba en aquellos momentos más que la salvación de las fórmulas, que primero es ser y después la manera de ser. Así lo comprendieron los republicanos y sólo tres jefes protestaron contra el primer decreto, alegando que era anticonstitucional y, en consecuencia, nulo, como si en esos momentos hubiera constitución.

Juárez no era en aquellos momentos un hombre, sino una causa; no era el presidente, sino la bandera; y la causa y la bandera estaban sobre todo y sobre todo en los instantes en que se resolvía el problema de ser o no ser de nuestra patria.

¿Que fue un golpe de estado? no lo fue. Pero si lo hubiera sido, ¡bendita la hora en que se dio, pues por él tenemos independencia, Constitución, honra y gloria!

Ralph Roeder<sup>3</sup> en *Juárez y su México* dice refiriéndose a los dos decretos antes señalados:

Aunque ambos pasos estaban bien fundados, la complicación de las dos cuestiones hizo del escarmiento un cargo muy inflamable. Al desafiar el prestigio y la popularidad de un héroe militar, cuya sed de poder se había agudizado con cuatro años de abstinencia y sumisión, el presidente puso a prueba su autoridad moral y logró un triunfo doble. El primero y el más duro era el triunfo sobre sí mismo; en el caso de Juárez, se emanciparon al fin esas ficciones legales que limitaban su autoridad real: la misma fuerza de las circunstancias le habían convertido en dictador, pero estaba

---

<sup>2</sup> Rafael de Zayas Enríquez, *Benito Juárez. Su vida. Su obra*. México, 1906. Pág. 206.

<sup>3</sup> Ralph Roedor, *Juárez y su México*, segunda edición, México, 1958, II, p. 323.

reacio a reconocer tan evidente verdad, hasta que la crisis lo obligó a superar la legalidad formal.

El otro triunfo, según Roeder, fue que al regreso a Chihuahua pudo constatar que "la lealtad de la población le dio la primera prueba del efecto producido por su decreto".

El implacable iconoclasta Francisco Bulnes, al examinar esta importante decisión, retrotrae su examen hasta la concesión de facultades omnímodas concedidas por el Congreso a Juárez, las que considera absurdamente redactadas por lo que las interpreta de este modo, para precisar su alcance:

Es indudable que el legislador quiso decir lo siguiente: "Te hago dictador omnipotente mientras dura el estado de guerra, prohibiéndote que comprometas de alguna manera la forma de gobierno constitucional, que debe continuar rigiendo cuando termine la guerra que nos obliga a investirme con la dictadura".<sup>4</sup>

Nos parece acertada y precisa esta interpretación de las facultades que se confirieron a Juárez y apoyándose en ella, como premisa, Bulnes emite su opinión sobre el decreto del gobierno encabezado por Juárez, de 8 de noviembre de 1865.

Desde el momento en que tenía que cesar por tiempo indefinido el régimen constitucional, no podía haber período constitucional presidencial y la dictadura de Juárez tenía que ser necesariamente indefinida, como lo era el estado de guerra que la había causado.

Desgraciadamente yo soy el primero que hace estos razonamientos el año de 1904, y la situación de 1865 no podía considerarlos ni regirse por ellos. Siendo imposible que Juárez se rigiese por la letra de la ley, era indispensable que lo hiciera por

---

<sup>4</sup> Francisco Bulnes, *El verdadero Juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio*, Editora Nacional, México, 1951, pp. 677-678.



su espíritu y conforme a él. Juárez, pues, no dio golpe de estado; obró correctamente.<sup>5</sup>

Ignorante de lo que estaba ocurriendo en Paso del Norte, el Gral. González Ortega sostuvo con Matías Romero, en Nueva York, el 6 de noviembre, una larga conversación en que le hizo saber que estaba decidido a reclamar la presidencia; que se presentaría oportunamente al territorio nacional con ese propósito y que tenía la intención de abandonar la República si el gobierno no le hacía entrega del cargo, pero que si por el contrario "la mayoría de la nación desconocía al presidente y lo llamaba a él, creería de su deber ocurrir a ponerse a la cabeza de esas fuerzas". Con increíble ingenuidad, el 12 de noviembre se dirige por escrito a Matías Romero, solicitando le proporcione dinero para poderse trasladar al país a hacerse cargo de la presidencia de la república, en el momento en que termine el período presidencial de Juárez.

Matías Romero no le proporcionó esos recursos e informó que el 18 de noviembre abandonó la ciudad de Nueva York, trasladándose hacia el sur de la República, todavía ignorante de la decisión tomada por el presidente Juárez.

Con el objeto de que los lectores puedan formarse un juicio de la reacción que produjo la decisión tomada por Juárez, entre los diferentes jefes, gobernadores y personalidades republicanas, se incluyen en orden cronológico algunos de los documentos que fueron apareciendo.

Pantaleón Tovar desde Nueva York, a mediados de noviembre, desconociendo también la decisión ya tomada, escribe a Juárez pidiéndole prorrogue su mandato.

Manuel Ruiz, el oaxaqueño que tan cerca ha estado de Juárez desde los tiempos de las actividades políticas en Oaxaca, que tan decisiva intervención tuvo en la redacción de las Leyes de Reforma y que fue fiel compañero e importante funcionario en los años siguientes, toma una decisión increíble. Envía el 1º de diciembre, desde Rioflorido, una carta al jefe militar francés, informándole que no reconoce ya el carácter de

---

<sup>5</sup> *Ibidem.*

Presidente de la República a don Benito Juárez y que ha decidido separarse de toda participación en las actividades de la República y refugiarse en el ejercicio de su profesión de abogado.

El 30 de noviembre, envía al ministro de Justicia del gobierno republicano un alegato en el que muestra su inconformidad por la prórroga y trata de fundarla. Comunica que en vista de la violación que se ha hecho de la constitución y las leyes secundarias, ha resuelto retirarse a la vida privada.

Manuel Ruiz era hombre de gran prestigio, por lo que el lamentable paso que dio, mereció que inmediatamente lo comunicara el comandante Billot al Gral. Barón Neigre, que se encontraba en Durango, quien a su vez lo hizo saber al Gral. Castagny y éste se apresuró a comunicarlo al mariscal Bazaine. Los imperiales tuvieron buen cuidado de darle amplia publicidad.

El gobierno no se quedó callado frente a la protesta de Ruiz; Lerdo de Tejada, ni tardo ni perezoso, preparó una sesuda respuesta como opinión del ministro de Justicia Fomento e Instrucción Pública, a la que se le dio también publicidad.

En cambio Andrés Viesca, gobernador del estado de Coahuila y su secretario Eduardo Múzquiz, comunican de inmediato que están de acuerdo en la prórroga de Juárez toda vez que está "conforme al espíritu de la Constitución, a los intereses de la república y a la voluntad nacional".

González Ortega llega a la frontera frente a Piedras Negras, en Eagle Pass, y escribe al gobernador de Coahuila, Andrés Viesca, invitándole para tener una entrevista; indebidamente fecha su carta en Piedras Negras, cuando en realidad se encontraba en la población vecina. Al día siguiente, 21 de diciembre da a conocer desde la ciudad estadounidense, *Eagle Pass* (usa el nombre traducido de Paso de Águila), la protesta por los decretos expedidos, la que dirige al Sr. Sebastián Lerdo de Tejada, sin darle tratamiento alguno. La decisión tomada por Juárez y por él la llama "acto inmoral e impolítico"; justifica su protesta en seis puntos, algunos de ellos de carácter jurídico y otros políticos.

Más explícito en el manifiesto que lanza al mismo tiempo, dirigido al pueblo de México. Gira su argumentación sobre la base de que el puesto de individuos de la Suprema Corte de Justicia, sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso y que él no ha renunciado a su puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual no está inhabilitado en sus funciones y le corresponde sustituir al presidente Juárez, una vez que ha terminado el período para el que fue elegido.

Guillermo Prieto, desde Presidio del Norte, hoy Ojinaga, escribe a Lorenzo Vega anunciando que se encuentra en franca disidencia con respecto al gobierno de Juárez.

En cambio el gobernador de Sinaloa, Domingo Rubí, comunica, en carta personal de 24 de diciembre, desde Concordia, su conformidad con la prórroga y lo mismo hace el gobernador de Guerrero, Diego Álvarez, desde la Providencia, el 25 de diciembre.

Ramón Corona, fechando desde Concordia, escribe el 24 de diciembre y dice: "el buen sentido nacional verá en estas disposiciones el afianzamiento de la suprema autoridad de la nación".

En, cambio el Gral. José María Patoni, desde Presidio del Norte, envía una respetuosa y atenta carta en que, apoyándose en consideraciones de carácter político fundamentalmente, notifica al presidente que no está de acuerdo con la prórroga, que la considera una usurpación y pide a Juárez "que retroceda del camino que ha emprendido y en el cual me es de todo punto imposible seguirlo." Es impresionante la carta de Patoni, visible es en ella el respeto y simpatía que por Juárez tiene y, a la vez, su convicción de que la decisión tomada no es acertada.

Juan Álvarez también manifiesta su aprobación por la prórroga presidencial, en misiva enviada desde La Providencia, el 20 de enero de 1865, diciendo que "es la única solución de las dificultades que se presentan".

# **DOCUMENTOS**

**Noviembre y diciembre de 1865**

SE PRORROGAN LOS PODERES DEL PRESIDENTE DE LA  
REPÚBLICA Y DE LA PERSONA QUE TENGA EL CARÁCTER DE  
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades que me confirió el Congreso nacional, por los decretos de 11 de diciembre de 1861, de 3 de mayo y de 27 de octubre de 1862 y de 27 de mayo de 1863; y  
Considerando:

Primero. Que en los artículos 78, 79, 80 y 82 de la constitución federal, únicos que tratan del período de las funciones del Presidente de la República y del modo de sustituirlo, tan sólo se previó el caso de que, siendo posible verificar nueva elección de presidente, de hecho no se verificase, sin haberse previsto el caso de una guerra como la presente en que, mientras el enemigo ocupe gran parte del territorio nacional, es imposible que se verifiquen elecciones generales en los períodos ordinarios.

Segundo. Que en estos artículos de la constitución, para sustituir la falta del Presidente de la República, se dispuso confiar al presidente de la Corte de Justicia el Poder Ejecutivo, sólo interinamente, en el único caso, que fue previsto, de que se pudiera desde luego proceder a nueva elección.

Tercero. Que cuando es imposible hacer la elección por causa de la guerra, el hecho de que el presidente de la Corte de Justicia entrase a ejercer el gobierno por un tiempo indefinido, importaría ya prorrogar y extender sus poderes fuera de las prescripciones literales de la constitución.

Cuarto. Que por la ley suprema de la necesidad de conservar el gobierno, la prórroga en el presente caso de los poderes del presidente y de su sustituto, es lo más conforme a la constitución porque, para evitar el peligro de acefalía del gobierno, se estableció en ella que hubiese dos funcionarios, de los que uno pudiera sustituir la falta del otro y porque, conforme a los votos del pueblo, el Presidente de la República fue elegido primera y directamente para ejercer el gobierno, mientras que el presidente de la Corte fue elegido primaria y directamente para ejercer funciones judiciales, no confiándole el gobierno sino secundaria e interinamente, en caso de absoluta necesidad.

Quinto. Y considerando que, no previsto el presente caso en la constitución, la facultad de declarar lo más conforme a su espíritu y prescripciones, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, que por la ley de 11 de diciembre de 1861, confirmada por otros repetidos votos de confianza del Congreso nacional, se delegó al Presidente de la República, para que, sin sujetarse a las reglas ordinarias constitucionales, quedase "facultado omnímodamente para dictar cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias, sin más restricciones que las de salvar la independencia e integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la constitución y los principios y leyes de reforma.

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1. En el estado presente de guerra, deben prorrogarse y se prorrogarán las funciones del Presidente de la República, por todo el tiempo necesario fuera del período ordinario constitucional, hasta que pueda entregar el gobierno al nuevo presidente que sea elegido, tan luego como la condición de la guerra permita que se haga constitucionalmente la elección.

2. Del mismo modo deben prorrogarse y se prorrogarán los poderes de la persona que tenga el carácter de presidente de la Corte de justicia, por todo el tiempo necesario fuera de su período ordinario para que, en el caso de que falte el Presidente de la República, pueda sustituirlo.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Paso del Norte, a 8 de noviembre de 1865.

Benito Juárez

Al ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y gobernación.

Y lo comunico a usted para los fines consiguientes.

Independencia y Libertad, Paso del Norte, noviembre 8 de 1865.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

Ciudadano gobernador del estado de...



SE DECLARA AL GRAL. GONZÁLEZ ORTEGA RESPONSABLE  
DEL DELITO DE ABANDONO VOLUNTARIO DEL CARGO DE  
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

El ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las amplias facultades que me confirió el Congreso nacional por los decretos de 11 de diciembre de 1861, de 3 de mayo y de 27 de octubre de 1862 y de 27 de mayo de 1863; y

Considerando:

Primero. Que el ciudadano Gral. Jesús González Ortega prefirió, en julio del año 1863, desempeñar el cargo de gobernador del estado de Zacatecas, abandonando en San Luis Potosí el cargo de presidente Constitucional de la Corte de Justicia.

Segundo. Que, por este motivo, siguiendo el ejemplo del Congreso que, en falta de presidente constitucional de la Corte, había nombrado provisionalmente en otra vez un Presidente de la Corte, resolvió el gobierno en la ciudad de Chihuahua, con fecha 30 de noviembre de 1864 y declaró en cuanto fuese necesario, que el ciudadano Gral. (González) Ortega quedaba con el carácter de Presidente de la Corte de Justicia.

Tercero. Que el objeto, literalmente expresado en aquella resolución, fue evitar el peligro de acefalía del gobierno, dando al ciudadano Gral. Ortega un título cierto y reconocido, para que, en

caso de faltar el Presidente de la República, pudiese entonces sustituirlo.

Cuarto. Que no contrariándose este objeto, porque podría llenarse en cualquiera lugar de la República, el gobierno concedió al ciudadano Gral. Ortega, en 30 de diciembre de 1864, la licencia que pidió el día 28 para ir a sostener con las armas la causa de la independencia en el interior de la república, bajo el concepto expreso en la licencia de que, según él lo solicitó, pudiera ir directamente por el territorio mexicano o bien pasando tan sólo de tránsito por país extranjero.

Quinto. Que el ciudadano Gral. Ortega marchó en seguida y, sin embargo, contra el tenor expreso de la licencia, en lugar de ir de tránsito, se ha quedado permaneciendo hasta ahora en país extranjero, sin tener licencia ni comisión, abandonando así el cargo de presidente de la Corte en las graves circunstancias actuales de la guerra, cuando han podido y pueden ser mayores el peligro y los inconvenientes de la acefalía del gobierno, el cual, en espera de su conducta, ni aun estaba expedito para nombrar un presidente de la Corte que, en el caso de faltar el Presidente de la República, pudiese desde luego sustituirlo.

Sexto. Que, además de esta responsabilidad por falta oficial en el cargo de Presidente de la Corte, aparece también responsable por otra falta del orden común, pues, teniendo el carácter de general, ha ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra, con abandono de la causa de la república, de sus banderas y del ejército.

Séptimo. Que, conforme al artículo 103 de la constitución, el Presidente de la Corte es responsable, durante su encargo, tanto por los delitos, faltas u omisiones oficiales en el mismo cargo, como por los delitos comunes.

Octavo. Y, considerando que el gobierno puede y debe declarar esa responsabilidad con el poder y las amplias facultades que le delegó el Congreso, no contrariando, sino aplicando dé un modo

justo en los casos necesarios las prevenciones de la constitución sobre responsabilidad de los funcionarios públicos.

He declarado lo siguiente:

Artículo 1º El ciudadano Gral. Jesús González Ortega, por el hecho de haber ido a permanecer en país extranjero durante la guerra actual, sin licencia ni comisión del gobierno, aparece responsable del delito oficial de abandono voluntario del cargo de presidente de la Corte de Justicia y, cuando se presente en el territorio de la República, el gobierno dispondrá lo conveniente para que se proceda al juicio en que se deba calificar su culpabilidad.

2º. Usando el gobierno de las amplias facultades que le delegó el Congreso y aplicando el artículo 104 de la constitución, declara que ha lugar a proceder contra el ciudadano Jesús González Ortega y que cuando se presente en el territorio de la República se procederá al juicio respectivo, por el delito común de que, teniendo el carácter de general del ejército, ha ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra, sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la república.

3. Conforme a lo practicado por el Congreso en otro caso, el gobierno, en uso de sus amplias facultades, nombrará un presidente de la Corte de Justicia, para que pueda sustituir al Presidente de la República, si llega a faltar antes de que pueda entregar el gobierno al nuevo presidente que se elija constitucionalmente, en cuanto lo permita la condición de la guerra.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en El Paso del Norte, a 8 de noviembre de 1865.

Benito Juárez

Al ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y Libertad, Paso del Norte, noviembre 8 de 1865.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

Ciudadano gobernador del estado de...

CIRCULAR DE LERDO DE TEJADA  
EXPLICANDO Y JUSTIFICANDO  
LOS DOS DECRETOS ANTERIORES

Ciudadano gobernador del estado de...

Envío a usted dos decretos que se ha servido expedir hoy el ciudadano Presidente de la República, relativos a la prórroga de sus funciones y al modo de sustituirlo si llegase a faltar, mientras la condición de la guerra permita hacer nueva elección constitucional. Desde que el gobierno resolvió en la ciudad de Chihuahua, con fecha 30 de noviembre de 1864, que no terminaba entonces, sino en este año, el período ordinario de cuatro años del ciudadano presidente, se indicaron ya en aquella resolución los fundamentos expuestos por muchos funcionarios públicos para sostener que debían prorrogarse los poderes y la autoridad del ciudadano presidente, por todo el tiempo necesario fuera del período ordinario, mientras la situación extraordinaria causada por la guerra hiciera imposible que se verificase nueva elección. Advirtió en aquella vez el gobierno que no quería entonces emitir ningún juicio sobre este punto, reservándose proceder en él como fuese más arreglado a la letra y al espíritu de nuestras instituciones, cuando llegase el tiempo oportuno en que se debería atender a todas las circunstancias que hubieran podido ocurrir, viendo si el estado de la guerra impedía aún verificar las elecciones.

Ahora que ha llegado la oportunidad de resolver el punto, se han expresado también en el decreto relativo de hoy sus principales fundamentos; por lo que nada más agregaré aquí algunas observaciones sobre los artículos de la constitución federal a que se refiere el decreto y que son los siguientes:

Artículo 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1° de diciembre y durará en su encargo cuatro años.

Artículo 79. En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 80. Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Artículo 82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1° de diciembre en que debe verificarse el reemplazo o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Estos artículos, como se dice en el decreto de hoy, son los únicos que tratan del período de las funciones del Presidente de la República y del modo de sustituirlo. En ellos, no sólo por su espíritu sino por su claro sentido literal, se ve que la constitución nada más previó y se refirió a los casos en que ya se hubiese hecho la elección o en que fuese posible y se mandara hacer desde luego.

Se ve, en efecto, que por el artículo 79 se dispuso encargar al presidente de la Corte el ejercicio del poder, en falta absoluta del Presidente de la República, mientras se presentase el nuevamente electo; que en el artículo 80 se cuidó de prevenir que se procediera a nueva elección y que, en el artículo 82, empleando palabras más precisas para repetir que el presidente de la Corte sólo se encargaría provisionalmente del Poder Ejecutivo, se dijo que lo depositaría interinamente, hablando en el concepto antes expresado, de que se procediera desde luego a nueva elección.

Redactados en este sentido todos los artículos, es natural y preciso dar el mismo sentido al precepto que contiene el 82, cuando estableció que al término del período ordinario, si por cualquier motivo no estuviese hecha y publicada la elección del nuevo presidente, cesaría el antiguo y el de la Corte depositaría interinamente el Poder Ejecutivo. Se supuso en este precepto, como se supuso literalmente en todos estos artículos, que fuese posible verificar la elección y se quiso prever el caso de que, sin embargo, de ser posible, por cualquier motivo no se hubiera de hecho verificado.

Aun sin comparar el sentido igual de todos los artículos, bastarían los conceptos empleados en el 82 para ver que fue redactado bajo el único pensamiento de ser posible la elección; pues, refiriéndose a que no estuviese hecha y publicada, sería aplicable el precepto que contiene, lo mismo al caso de que la elección no estuviese hecha ni publicada, como al caso de que sí estuviese hecha y no publicada.

El pensamiento constante de referirse a la posibilidad de la elección inmediata, resaltó más en el mismo artículo 82, al decir que el ejecutivo se confiara al presidente de la Corte para que lo depositase interinamente. Se emplearon así estas dos palabras, de las que cada una de ellas hubiera bastado por sí sola, para significar que no se pensó en el caso de que el presidente de la Corte tuviera el poder por un tiempo largo indefinido, sino que lo depositase y que lo tuviera entretanto se publicaba una elección ya hecha o se procedía a una elección inmediata. No pudo pensarse que un depósito interino fuese por tiempo indefinido, ni tampoco, si se hubiese pensado en el caso de que pudiera no ser posible la elección en un tiempo dilatado, se pudo creer que bastase, para toda eventualidad, confiar el poder a un funcionario elegido con anterioridad para un período de seis años, de los que pudiese haber transcurrido ya la mayor parte.

Sería claramente infundado atribuir a una regla de la constitución tal sentido, que resultasen infringidas otras reglas literales de la misma. Así sucedería si se pretendiera aplicar el artículo 82 aun en el caso de no ser realmente posible la elección; porque entonces se infringían las otras reglas literales y expresas, en que sólo se previó confiar el poder al

presidente de la Corte para que lo depositase interinamente, mientras se presentaba el nuevo presidente ya electo o mientras se mandaba hacer desde luego nueva elección.

Es evidente que el único espíritu del artículo 82, fue precaver el peligro de que algún Presidente de la República abusase de su autoridad y poder para impedir que se presentase el nuevamente electo o para estorbar que se hiciese la elección cuando fuera posible hacerla. Habría faltado toda razón para disponer lo mismo respecto de un caso como el actual, en que sin ninguna voluntad ni culpa presumible del presidente, hubiera un impedimento real y absoluto para no hacer la elección, en virtud de la notoria imposibilidad causada por la guerra. Faltando en este caso todo motivo de presumir aquel abuso culpable, sería muy infundado suponer que, en las circunstancias más graves y difíciles de una guerra, hubiese querido la constitución quitar el título de la autoridad al que mereció la primera y preferente confianza del pueblo y que llamase en su lugar al que sólo fue elegido para que lo sustituyese en los casos indispensables, dentro del régimen ordinario constitucional.

Nada tiene de irregular ni de nuevo que algunas reglas de una constitución, relativas a un objeto que sólo puede cumplirse en tiempos comunes de paz, no se hayan establecido ni acomodado a la previsión de un caso en que la guerra haga temporalmente imposible observarlas. Lo único que se puede prever para tal caso, fue lo previsto en el artículo 128 de la constitución para que, si por una rebelión o guerra se interrumpe en cuanto sea inevitable la observancia de sus preceptos, "tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia".

Por esto, nada tiene de notable que no se hicieran ni se acomodasen a la previsión del caso de absoluta imposibilidad causada por la guerra los artículos de la constitución que se refieren al período de las funciones del presidente y al modo de sustituirlo. En estos artículos, primero se estableció un principio y, después, se establecieron, como consecuencia suya, las reglas necesarias para hacer observarlo. En el artículo 78 se estableció como un principio el período electoral de cuatro años y en los artículos 79, 80 y 82 se consignaron, como consecuencias del principio, las reglas para la renovación o la sustitución del presidente,



en su falta, o al término del período. Para el caso de suspenderse inevitablemente el principio, cuando la guerra hace imposible observar el período electoral, no pudo establecer la constitución ni podrían ser aplicables las consecuencias o reglas establecidas, con el único fin de que el período electoral fuese fielmente observado.

En un caso como el de la guerra actual, la suprema necesidad de conservar el gobierno, hace que justa y necesariamente se prorroguen las funciones del que deba desempeñarlo. Si la guerra hiciese imposible la nueva elección después de la falta absoluta del Presidente de la República, sustituido ya por el presidente de la Corte, sería indudable que debieran prorrogarse sus funciones por todo el tiempo necesario; pero como la prórroga sólo puede fundarse en la absoluta necesidad, mientras ésta no llegase tampoco habría motivo para hacerla.

Siendo ya imposible hacer desde luego la elección, en el tiempo que se llamase al presidente de la Corte, no podría decirse que sus funciones sólo se prorrogarían al término del tiempo que le faltase para cumplir su período de seis años, sino que en el mismo hecho de entrar a ejercer el gobierno, estarían ya prorrogados sus poderes fuera de las prevenciones de la constitución. Como las reglas literales de ésta no lo llaman al ejercicio del poder sino de un modo provisional, para que se mande hacer desde luego la elección resultaría que cuando no es posible hacerla por causa de la guerra, el mismo hecho de que entrase a desempeñar el gobierno de un modo permanente por tiempo indefinido, tendría ya el carácter de quedar prorrogadas sus funciones, fuera de la letra y del espíritu de las reglas constitucionales.

Así es que, la imposibilidad causada por la guerra hace que en el próximo término del período ordinario de cuatro años, sea inevitable una prórroga de funciones, lo mismo en el caso de continuar el Presidente de la República que en el caso de sustituirlo el de la Corte de Justicia. Si la prórroga es inevitable en uno y otro funcionario, ninguna razón habría para que no pudieran prorrogarse los poderes del que recibió la primera y preferente confianza del pueblo, queriendo antes prorrogar más bien los del que fue elegido para que pudiese depositar interinamente el gobierno, en caso de absoluta necesidad. Sin duda es lo más regular y más

conforme a la constitución, que queden prorrogados en cuanto sea necesario los poderes de ambos, porque así se guarda el orden de la elección popular y porque, si la constitución quiso que hubiese dos funcionarios, de los que uno pudiera sustituir al otro, para precaver el peligro de acefalía del gobierno, aun en tiempos normales de paz, más se debe precaver ese peligro en tiempo de guerra, que puede ser mayor y por tiempo indeterminado.

Por otra parte, si hubiese alguna duda de ser esto lo más arreglado al espíritu y prevenciones de la constitución, la facultad de resolver esa duda sólo correspondería al Poder Legislativo nacional, que ejerce ahora el ciudadano Presidente de la República por habérselo delegado el Congreso con facultades omnímodas, para disponer cuanto juzgase conveniente en las circunstancias de la guerra, sin más restricciones que las de salvar la independencia e integridad del territorio, la forma del gobierno establecida en la constitución y los principios y leyes de reforma.

Resuelto el punto de la prórroga de las funciones del ciudadano presidente, ha sido indispensable prever el caso de que llegase a faltar y debiera ser sustituido. Por este motivo ha sido necesario dictar el otro decreto de hoy, con relación al hecho de que el ciudadano Gral. Jesús González Ortega, haya estado permaneciendo sin licencia ni comisión en país extranjero, con abandono del cargo de presidente de la Corte y también de sus servicios en el ejército.

Otra vez hizo antes en San Luis Potosí abandono del cargo que tenía de Presidente Constitucional de la Corte de Justicia, prefiriendo ir a desempeñar, sin ninguna autorización ni licencia para ese efecto, el cargo de gobernador constitucional del estado de Zacatecas. En la citada resolución que dictó el gobierno en la ciudad de Chihuahua, con fecha 30 de noviembre de 1864, se expusieron los fundamentos porque podía juzgarse que había dejado de tener el carácter de presidente de la Corte desde entonces. El artículo 118 de la constitución prohíbe tener a la vez dos cargos de elección popular, permitiendo al nombrado elegir entre ambos el que quiera desempeñar. Aunque la letra de este artículo de la constitución habla del caso de dos cargos de la unión, como no hay en

aquella otra regla especial para el caso de un cargo de la unión y un cargo de algún estado; como la razón de incompatibilidad no sólo puede ser igual en ambos casos, sino mayor en el segundo y, como debió presumirse que el mismo ciudadano Gral. (González) Ortega hubiese creído usar de un derecho y no cometer una grave falta, pudo juzgarse que había preferido, conforme al artículo constitucional, dejar de tener el cargo de presidente de la Corte, para poder desempeñar el de gobernador del estado de Zacatecas.

Sin embargo, atendiendo nada más el gobierno al interés nacional de que hubiese quien tuviera un título cierto y reconocido para que en caso de faltar el ciudadano Presidente de la República pudiese sustituirlo, resolvió en Chihuahua que el ciudadano Gral. (González) Ortega quedaba con el carácter de presidente de la Corte. No se le dio entonces, ni el gobierno podía darle, el título de presidente constitucional de la Corte, que sólo puede proceder de la elección popular y que él había abandonado en San Luis Potosí, sino que, usando el gobierno de sus amplias facultades, declaró que quedaba el ciudadano Gral. (González) Ortega con el carácter de presidente de la Corte. Para esto, el gobierno siguió en cuanto fuese necesario el ejemplo del Congreso que en falta de presidente constitucional de la Corte había nombrado de un modo provisional un Presidente de la Corte en otra ocasión.

En la copia que envió anexa a esta circular, constan los términos en que pocos días después el ciudadano Gral. (González) Ortega pidió una licencia que le concedió el gobierno, para que pudiese ir a sostener como militar la causa de la independencia en el interior de la República. Contra los términos expresos de la licencia, en lugar de ir de tránsito, se ha quedado en país extranjero, apareciendo responsable, tanto por la falta oficial de abandono del cargo de presidente de la Corte, como por el delito común de que, con el carácter de general del ejército, haya abandonado durante la guerra sus banderas.

Acerca de la responsabilidad de los funcionarios públicos por faltas oficiales en el ejercicio de sus encargos, previene el artículo 105 de la constitución que el Congreso, como jurado de acusación, puede declarar la culpabilidad y que corresponde a la Corte Suprema de Justicia

aplicar la pena que designe la ley, como jurado de sentencia. En cuanto a la responsabilidad por delitos comunes, esto es, que no se refieran al ejercicio del mismo encargo, previene el artículo 104 que el Congreso declarará si ha lugar a proceder contra el acusado, en cuyo caso queda por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto a los tribunales comunes.

Entre las facultades conferidas al gobierno, por el decreto de 27 de octubre de 1862, se puso la restricción de que no pudiese contrariar las prevenciones del título IV de la constitución, que trata de la responsabilidad de los funcionarios públicos. El objeto de esta restricción fue que no se procediera contra ellos por medios indebidos o arbitrarios, que serían los que contrariasen las prevenciones constitucionales; sin ser posible que la restricción se refiriese a los procedimientos arreglados y justos, pues con éstos no se contrarían sino que se aplican aquellas prevenciones, para hacer efectiva la responsabilidad en los casos necesarios. Usando el gobierno de las facultades que le delegó el Congreso, ha aplicado dichas prevenciones en el caso de la traición de don Santiago Vidaurri y en otros casos en que lo ha estimado necesario; porque nunca pudo creerse el absurdo de que se pudiera establecer una absoluta impunidad, especialmente respecto de las faltas oficiales o delitos comunes que directamente perjudiquen la causa de la independencia en la guerra actual.

Por los graves motivos expuestos en el decreto relativo de hoy, el gobierno ha considerado que en el caso del ciudadano Gral. (González) Ortega, era justo y necesario declarar su responsabilidad. Respecto de la falta oficial por abandono del cargo de presidente de la Corte, sólo se ha declarado que cuando se presente en el territorio de la República, se dispondrá lo conveniente para que se proceda al juicio, en que deba examinarse y calificarse su culpabilidad. Respecto del delito común, por la notoriedad de la falta de que, con el carácter de general, haya abandonado durante la guerra las banderas del ejército, se ha declarado que ha lugar a proceder contra él a reserva, también, de que en el juicio respectivo pueda examinarse y calificarse su culpabilidad.

Ha sido necesario y aun inevitable, que el gobierno se ocupase de la responsabilidad del ciudadano Gral. (González) Ortega en estas circunstancias. No sólo ha estado permaneciendo fuera de la República cuando era mayor su deber de estar en ella, para que si llegaba a faltar el ciudadano Presidente de la República se precavieran desde luego los inconvenientes de la acefalía del gobierno; sino que, ni antes ni ahora, se ha dirigido a éste para manifestar cuando pensase regresar al territorio mexicano. En espera de su conducta, ha impedido que estuviera el gobierno expedito, como es indispensable que lo esté, para proveer en tiempo oportuno a evitar ese peligro de acefalía y por este grave interés ha sido preciso ocuparse, según era justo, de aquella responsabilidad.

En las circunstancias de la guerra actual, el que ha ejercido ya algún tiempo el gobierno, lejos de que conservándolo pueda satisfacer algún interés personal, sólo tiene que arrostrar dificultades y peligros. Así, pues, el único móvil del ciudadano Presidente de la República, al acordar estos decretos, es la firme y constante resolución de cumplir hasta el fin sus obligaciones para con la patria y para con el pueblo que lo eligió.

Independencia y Libertad, Paso del Norte, noviembre 8 de 1865.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

EL GRAL. GONZÁLEZ ORTEGA  
DECIDIDO A RECLAMAR LA PRESIDENCIA

Nueva York, noviembre 7 de 1865

Ciudadano ministro de Relaciones Exteriores  
El Paso del Norte

Ayer estuve con el abogado del Gral. (González) Ortega, quien me informó que la sentencia pronunciada el 3 del actual equivalía al término del litigio, pues, en primer lugar, el negocio pasaba del juzgado criminal al civil y el Gral. (González) Ortega podía ausentarse desde luego del país sin necesidad de dar fianza.

Sabiendo que el referido general está haciendo sus preparativos para irse cuanto antes y, deseando tener una conversación franca con él antes de que emprenda su marcha, convenimos en que vendría a verme anoche. Pasé tres horas con él conversando sobre la situación en general y, muy especialmente, sobre la cuestión del período del presidente. Le manifesté con toda franqueza mi modo de ver esta cuestión y le encarecí la necesidad de proceder con la más grande discreción en estas difíciles circunstancias, porque cualquiera paso en falso podría producir consecuencias fatales para nuestra causa.

El Gral. (González) Ortega me dijo que se había ocupado muy detenidamente en meditar lo que debería hacer en este caso; tiene la creencia de que el presidente no prolongará su período sin romper la Constitución y la casi seguridad de que cuando se presente en ésa se le entregará la presidencia; pero ha previsto ya el caso en que esto no sea así y, entonces, se propone publicar un manifiesto a la nación en que exprese que la resolución del gobierno ha sido adoptada a pesar de sus observaciones, que él la considera como una violación de la Constitución

y que solamente por no aumentar los males públicos y encender la guerra civil, no opone resistencia a esta medida y se ve obligado a salir del territorio nacional.

Me dijo que sabía de una manera del todo fidedigna que varios de los jefes que pelean contra los franceses estaban dispuestos a levantar una acta el 30 del actual, desconociendo al presidente; que algunos de ellos le habían enviado comisionados solicitando su aprobación y ofreciéndole fuerza armada que lo apoye al llegar a la República; pero que él había desaprobado decididamente la idea de que se pronunciaran antes de saber la resolución del presidente, que había dicho que no necesitaba de un solo soldado y que no había querido escribir una sola letra para que no sirvieran sus cartas de pretextos para provocar algunos movimientos.

Cree que en estas circunstancias en que la acción del gobierno no puede hacerse sentir eficazmente y en que necesariamente debe haber gran desorden, habrá muchos jefes, que no porque tengan motivos de preferirlo a él sobre el presidente, sino por desarrollar sus miras personales, se aprovechen de ese pretexto para levantarse contra el supremo gobierno, deponer a los jefes nombrados por el presidente y hacerse ellos de la situación. Tiene la seguridad de que muchos obrarán de este modo.

Expresó la idea de que el presidente es obedecido y acatado, no por sus méritos personales y su patriotismo, sino porque tiene de su parte la ley; pero que, si rompe ésta, pierde sus títulos y no podrá contar con el apoyo nacional. Aunque tiene la intención de salir de la República si no se le entrega el gobierno, me dio a entender que, si después de publicado su manifiesto y estando fuera del territorio nacional, veía que la mayoría de la nación desconocía al presidente y lo llamaba a él, creería de su deber ocurrir a ponerse a la cabeza de esas fuerzas.

Aunque estas son sus intenciones actuales, temo mucho que, estando una vez en la República y rodeándolo algunas personas animadas de malas pasiones, lo hagan cambiar de resolución y adoptar una conducta del todo antipatriótica.

En su manifiesto se propone hacer mérito, según entiendo, de algunos incidentes que no valen la pena de referirse aquí y que procurará

presentar para hacer recaer en virtud de ellos una gran responsabilidad sobre el supremo gobierno.

Todavía no ha salido de esta ciudad y probablemente tardará algunos días más, por no haber conseguido aún los fondos que necesita para moverse. Entiendo que no piensa ir a El Paso (del Norte) directamente sino primero a Piedras Negras, para seguir de allí subiendo el Río Bravo hasta esa ciudad.

Reitero a usted las seguridades de mi muy distinguida consideración.

Matías Romero



GONZÁLEZ ORTEGA LE PIDE DINERO A LA LEGACIÓN  
PARA VOLVER AL PAÍS

Ciudadano Matías Romero,  
Enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario  
de la República Mexicana cerca de este gobierno  
Presente:

Concluido favorablemente el día 3 del corriente el juicio injusto e inhumano que promovió y siguió contra mí el coronel Allen, habría emprendido inmediatamente mi marcha para el punto en que se halla actualmente el presidente Benito Juárez, con el objeto, por mi parte, de llenar uno de los más esenciales preceptos de nuestra Constitución política, esto es, con el de que no falte de manera alguna un gobierno legal en México en las actuales circunstancias porque atraviesa aquel país; pero la falta absoluta de recursos me impidió verificar dicha marcha. Para facilitar ésta, reuní en lo personal a varios amigos míos de México, residentes actualmente en esta ciudad, en agencia de la pequeñísima suma de 1,000 pesos, ofreciendo hacer el pago con fondos de mi familia y garantizándolo con mi firma.

Todo esto ha sido inútil, como usted lo sabe.

En esta ciudad existen casas con quienes he celebrado contratos de armas por gruesas sumas de pesos, en distintas veces; contratas que he dejado cubiertas por mi parte con la mayor puntualidad. Fácil, pues, me sería recurrir a una de estas casas en solicitud de la suma mencionada y creo también que me sería fácil adquirirla, atendiendo a que el giro de dichas casas es la especulación y a que puedo en lo personal garantizar este pago; pero me he resistido a dar este paso por las razones siguientes: todo el mundo me conoce en Nueva York; todo el mundo sabe que soy el presidente constitucional de uno de los poderes supremos de la República

de México y pocos ignoran, quizá, porque de todo esto se ha ocupado la prensa periódica, que en el próximo mes de diciembre debo encargarme del Poder Ejecutivo de aquella nación, por cesar en el presente mes de noviembre las funciones legales del presidente Benito Juárez y, en la posición política que actualmente ocupo en mi país, mucho llamaría la atención el que recurriera a una casa extranjera en solicitud de la miserable suma de 1,000 pesos para retirarme y más llamaría la atención cuando se sabe que en esta plaza se ha concluido un empréstito de algunos millones, por orden y disposición del gobierno legítimo de México para las atenciones públicas de aquella nación.

Repito que nada tiene de notable que a un particular se le acaben los recursos en el extranjero y que tenga que recurrir a medios decentes y ordinarios para proporcionárselos; pero aunque yo quisiera reputarme como un particular, mis actos todos se han de llevar al terreno de la cosa pública para comentarlos y natural es que los enemigos de México lo hagan siempre de una manera desfavorable.

Para evitar, pues, todo esto, espero que usted se sirva hacer que, de los fondos del empréstito, se me proporcione, mañana mismo, 13 del corriente, si es posible, la cantidad de \$ 1,300 en oro, o su equivalente en papel moneda de los Estados Unidos, en el concepto que sólo las razones que he expuesto me han obligado a dar este paso; pero deseando no ser gravoso a mi gobierno en las actuales circunstancias, puede usted abonar la referida cantidad de \$ 1,300, en los certificados que, suscritos por el señor ministro de Hacienda, existen en mi poder relativos a cantidades ministradas por algunas casas de México para las atenciones públicas, bajo mi responsabilidad. No me dirijo en este negocio al Gral. José M. Carbajal, que es la persona autorizada por nuestro gobierno para agenciar el empréstito porque, siendo su comisión de un carácter muy especial, nada tiene que hacer en los asuntos generales de México; no así usted, que es en este país el representante general de aquella nación y por cuyo conducto e inmediata inspección, según estoy informado, debe hacerse todo lo que a ella concierna.

Independencia, Libertad y Reforma de México, Nueva York,  
noviembre 12 de 1865.

Jesús González Ortega

SALE GONZÁLEZ ORTEGA EN DIRECCIÓN A LA REPÚBLICA

Nueva York, noviembre 19 de 1865

Sr. don Benito Juárez  
El Paso (del Norte)

Mi muy querido amigo:

Mañana me regreso para Washington y antes de hacerlo envío al Sr. Lerdo una larga correspondencia con varias cosas importantes.

El Gral. (González) Ortega salió ayer para la República. No se despidió de nadie ni dijo a dónde iba. Aureliano (Rivera) ha desaparecido al mismo tiempo.

La noticia del fusilamiento de los Grales. Arteaga y Salazar y otros varios jefes y oficiales se ha confirmado. Por el correo próximo enviaré a usted copia de algunas cartas venidas de México.

Sin tiempo para más, me repito de usted afectísimo amigo atento y seguro servidor.

Matías Romero

JOAQUÍN VILLALOBOS  
FUNDAMENTA SU REPULSA A LA PRÓRROGA

Nueva York, octubre 7 de 1865

Sr. don Benito Juárez

Señor:

Las circunstancias excepcionales, porque atraviesa nuestro país, me obligan a dirigir a usted esta carta, con el único objeto de manifestarle cual es mi opinión en la política actual, y lo que creo justo y conveniente; no vea usted mis letras como el consejo de un sabio, que indudablemente no soy, ni menos como el resultado de una parcialidad; lo que quiero decir ahora a usted es obra del amor a mi patria y a las instituciones republicanas que por fortuna nos rigen aún; tome usted en este concepto mi carta y escúcheme.

Uno de los grandes motivos que la Francia ha señalado como origen de su intervención, ha sido el desorden y la falta de respeto a la ley, en que los mexicanos han vivido siempre; por desgracia, nuestra reforma que originó la agonía y muerte del partido retrógrado, ha causado con ella una guerra civil que era del todo necesaria, pero que en Europa no han juzgado de la misma manera. Todos los partidos hasta la época de la revolución de Ayutla, han levantado sus hombres para derribarlos en seguida y el bando conservador, incorregible hasta el sepulcro, debe su desprestigio a la veleidad de sus actos y de sus hombres, no así el partido liberal que, convencido de que la ley era la única que debía regirlo, trajo, desde esa misma revolución de Ayutla, un camino legal y ningún contratiempo ni ningún obstáculo lo han hecho cambiar de resolución.

La salida del Sr. Álvarez, que fue algo tempestuosa, pudo comprometer en mucho nuestra situación; pero por fortuna un arreglo pacífico ordenó todo y abrió al Sr. Comonfort el paso para la presidencia. Este señor comprendió, por desgracia, mal su papel y queriendo hacerse gratuito ladrón de lo que legalmente poseía, apoyó el memorable golpe de estado, procurando con esto infringir la ley y torcer la opinión pública.

Usted sabe perfectamente cuál fue el resultado de semejante escándalo; el partido clerical extendió sus brazos al jefe de la revolución, no para estrecharlo sino para ahogarlo entre ellos y Comonfort, desengañado pocas horas después de su traición, conoció que las asonadas militares habían perdido ya su influencia en el país y que sólo la ley tenía pleno dominio. He aquí por qué el apóstata de Ayutla abrió a usted las puertas de su prisión y lo dejó libre para unirse a las tropas que lo esperaban y que unánimemente reconocieron a usted como gobierno. Todos los estados casi prestaron a usted su adhesión y ofrecieron defenderlo.

Es indudable que al violar su juramento Comonfort dejaba el campo expedito para encumbrar la ambición de muchos políticos influyentes y que podría esperarse que cada entidad civil o militar caminara por distinto rumbo; sin embargo, ninguno lo hizo; por el contrario, todas las notabilidades republicanas, capaces de poner en juego su ambición personal, se constituyeron el baluarte de la ley, tomando a Benito Juárez como el sucesor legítimo de la presidencia de México.

El curso de aquella lucha es inútil seguirlo, pero baste decir que, en medio de las derrotas que sufrió nuestro ejército y en medio de la confusión natural que originaban tan continuos descalabros, jamás la autoridad de usted fue desconocida y aun tomando aguas y países extranjeros para volver a entrar al país se le respetó siempre. Veracruz, que fue el sitio que el gobierno republicano escogió para situarse, abrió sus puertas a la suprema autoridad de la nación, levantó sus murallas y derramó la sangre de sus hijos para defender, en Benito Juárez, a la ley. El triunfo de la causa nacional se obtuvo al fin y la capital de la República ofreció en su palacio un asiento al legítimo presidente.

Más tarde y con los trámites legales, se procedió a la elección de presidente constitucional; porción de individuos lucharon con usted en la palestra; pero la mayoría del país eligió a usted y, por tanto, aun los mismos contrarios a esa elección lo reconocieron.

Desde entonces los opositores —entre los cuales me he hallado— procuramos por medio de la prensa juzgar los actos de la administración de usted, pero nunca sin separarnos de la ley y sin aconsejar mucho menos que la fuerza de las armas o cualquiera otro medio ilegal lo lanzara del asiento que ocupaba.

No hay duda que ya con esto era bastante para probar el respeto que rendían los mexicanos a sus autoridades elegidas; pero Dios, que sin duda quería demostrar con más vigor ese respeto nuestro a la ley, hizo llevar a la República Mexicana la intervención extranjera, para probar completamente nuestra solidez; en vano Napoleón y sus soldados han procurado, por cuantos medios les ha sido posible, desconocer y hacer desconocer al Presidente de la República; hace más de tres años que recorriendo el invasor nuestro país, en todas direcciones, no ha podido echar por tierra la base legal en que se apoya nuestro pabellón. Cuantas tropas empuñan las armas para defender la República, proclaman a Juárez, cuantas leyes se dan llevan la firma de Juárez, de cuantas batallas se ganan o pierden por los buenos mexicanos se da cuenta a Juárez y los mismos Estados Unidos, que no tienen más norma que la ley, no reconocen otra autoridad ni otro poder legítimo que el de Juárez.

Sin embargo, se dirán tal vez, ¿es acaso el individuo el que trae consigo y sólo por su persona, semejante reconocimiento? ¿Es Benito Juárez únicamente como Benito Juárez, quien hace todo esto? No, sin duda; podrá nuestro jefe supremo tener las suficientes virtudes para granjearse semejante estimación; pero lo que las tropas hacen, lo que hace valer las disposiciones gubernativas y lo que reconocen los Estados Unidos no es Benito Juárez, sino la legalidad y la ley.

Pues bien, señor, después de estos ligeros apuntes y después de estas cortas reflexiones cuál no sería mi admiración al saber que algunos mexicanos residentes en Nueva York, titulándose amigos de usted y de nuestra nacionalidad, sin ser ni lo uno ni lo otro, manifiestan que, a pesar

de haber usted concluido su período de mando debe continuar en el poder, alegando para ello motivos que están por cierto muy lejos de ser buenas razones; estas personas acaso sin querer procuran nublar la gloria de usted y hundirnos en la anarquía más triste. A nadie se oculta cuál ha sido el camino llevado desde Ayutla hasta la fecha y, sin embargo, parece que ese trozo interesante de la historia mexicana, no es sabido por tan imprudentes consejeros. La República no tiene otro medio para salvarse que el respetar sus leyes y si consintiera por una falsa conveniencia en violar la legalidad, cada cual tendría derecho después a levantarse como soberano y a mandar a su antojo.

Una de las razones, que dan los que quieren que usted continúe con el mando supremo, es la de que el Gral. González Ortega no sostendrá incólumes los derechos de la nación y ocasionará la pérdida de una patria que usted tan dignamente ha defendido; yo sobre este punto no quiero formar juicio; puede que acierten esos individuos y puede que se engañen; pero en lo que no hay duda es en que la continuación de un poder ilegal y la resistencia de entregar un gobierno que la ley reclama que se entregue, haría de usted en lo sucesivo, ya no el Presidente, de la República Mexicana, sino únicamente el revolucionario. Además, ya que tan mal aconsejan los que quieren desviarse del camino legal para tomar el de la conveniencia, no será malo exponerles lo siguiente:

Después que la muerte de Lincoln, ha dado con el enaltecimiento fácil de Johnson, una gran prueba de lo sujeto que están los pueblos republicanos a sus instituciones; cuando la Europa entera que acusaba a las repúblicas de estar basadas falsamente en su sistema de gobierno, no ha dudado en cantar mil alabanzas en honor de ese sistema que atacaba; cuando, en fin, ha comprendido el universo, que en los pueblos que tienen leyes, poco importa la desaparición de los hombres; cuando existen tan hermosos ejemplos, ¿vendremos los mexicanos a desvirtuar a la República y a dar un escándalo más a los que hemos dado anteriormente?

¿Qué sería más grande para Juárez, revolucionar y anarquizar su país o entregar el depósito que la ley le exige y dejar satisfecho con esto a la ley y a su conciencia?



¡Qué espectáculo tan grandioso sería ver en el desierto y donde apenas hay terreno para colocar el libro de nuestro código, abrir las hojas de ese libro y cambiar los papeles, dos hombres que salen o entran según su obligación o derecho! ¿Qué cabecilla, por ambicioso que fuera, dudaría de este acto y procuraría extender las alas de su ambición? El enaltecimiento de Johnson al poder, no daría a la prensa y a los gobiernos del orbe más materia para rendir un elogio nuevo al sistema republicano, que el que le ofreciera usted con tan cumplido y justo ejemplo. Entonces los juicios severos de muchos publicistas, que exageran y aun desconocen la manera de conducirnos, templarían su censura y no echarían más fango sobre nuestro rostro; entonces el célebre Richard Gobden probaría, una vez más, que se ha engañado en su juicio, cuando declaró que la República Mexicana era ingobernable y que la civilización no entraría jamás a ese país.

Sí, Sr. Juárez, hoy puede usted ser en nuestra patria el hombre más grande o el más pequeño; su conducta puede lanzarnos a un abismo o elevarnos hasta el cielo, no haga usted que la posteridad lo tenga por responsable de consecuencias funestas; ni quiera prestar más oído que a la voz de la ley y a la de su conciencia; por fortuna puede usted hacer lo que pocos habrán podido hacer sin duda: tres años y medio, en la ciudad o en la montaña, ha empuñado usted la bandera mexicana y en suelo mexicano la deposita usted en manos de su sucesor; si éste la lleva hasta la capital de la República, no por eso nublará en algo la gloria de usted y si, por el contrario, ese pabellón se marchita en las manos del nuevo presidente quédesele a usted la satisfacción de que ha llenado valerosamente un deber que otros no han podido llenar.

Dispense usted que lo haya molestado y vuelvo a repetirle que tome mis razones, si no como las mejores, a lo menos como las más sanas que puede ofrecerle su servidor.

Joaquín Villalobos

## SE LE PIDE A JUÁREZ PRORROGUE SU MANDATO

New York, noviembre 16 de 1865

Sr. Presidente don Benito Juárez

Muy estimado amigo y señor:

Después de muchos esfuerzos parece al fin que el Gral. (González) Ortega ha conseguido recursos —\$ 1,300— para irse al país con el objeto de ocupar la presidencia desde el 1º de diciembre.

Si su derecho legal —del cual dudo, porque habiendo salido del país y permanecido fuera de él tanto tiempo— le llama a ocupar la primera magistratura del país, creo y conmigo la mayor parte de los que aquí estamos y también la opinión de la República según cartas que han llegado de allá, creemos, digo, que la conveniencia pública exige imperiosamente la permanencia de usted en el poder. Y esta opinión, no es sólo de los mexicanos. Varios americanos influyentes y la prensa extranjera emiten la misma idea; los unos porque han tratado de cerca al futuro presidente, otros porque lo han visto pasearse meses enteros en Broadway, siendo general de división de un pueblo que combate por su independencia y todos, en fin, porque creen que no ha de tener ni la constancia ni la energía necesarias que exige la difícil posición en que se encuentra la República.

Motivos aún de mayor interés, que a usted no se le esconden y que es inútil decir a usted, porque indudablemente influirían en el estado de México, nos hacen desear que no abandone usted el puesto en estas circunstancias, en que el nombre de usted es para el extranjero una garantía de resistencia y de tenacidad contra la intervención.

La cuestión es difícil de resolver, sobre todo para quien, como usted, ha fundado su poder en la legalidad; pero creo que sobre la legalidad está la salvación de la patria; creo que hoy, la constitución duerme; y que, en fin, desapareciendo el individuo ante la cosa pública, bien puede y aun debe sacrificarse en aras de la nacionalidad. El tiempo se acerca y esperamos los sucesos con la mayor ansiedad. Esperamos que usted resuelva el problema, que se presenta actualmente, en el sentido que sea mejor para el bien de la nación.

El nombramiento del Gral. Logan para ministro de este país cerca del gobierno de que usted es jefe, ha causado verdadera sensación en esta ciudad y ha venido, si no a reanimar la esperanza nuestra porque no la hemos perdido, sí a darnos la seguridad de que este gobierno no reconocerá a Maximiliano. Creemos que este nombramiento, recaído en un acérrimo partidario de la doctrina Monroe, es muy significativo e influirá mucho en el buen éxito de los negocios de Carbajal.

Consérvese usted bueno y mande a su amigo y servidor que besa su mano.

Pantaleón Tovar

P. S.

Se dice que González Ortega dice que no necesita ir a El Paso (del Norte) a recibir la presidencia, porque ésta no es un cajón que se entrega; que sólo le basta estar en el territorio nacional el 30 de éste, para declararse presidente. Se dice que irá a El Paso (del Norte), que si no se le entrega la presidencia protestará contra ese acto y se vendrá al extranjero, salvo el caso de que encuentre una fuerza bastante a sostenerlo. Esto se dice. Lo cierto es que hoy está aquí aún y que no tendrá tiempo para estar en El Paso (del Norte) el último del mes.

MANUEL RUIZ SE PRESENTA  
A LAS AUTORIDADES DEL IMPERIO

Rioflorido, diciembre 1º de 1865

Sr. Jefe de escuadrón de Estado Mayor, Billot,  
en mando de las fuerzas francesas de Rioflorido

Muy señor mío y de mi estimación:

Habiéndose prorrogado al Sr. don Benito Juárez el período constitucional y, no reconociéndolo yo con el carácter de Presidente de la República que antes tenía por la ley, me he resuelto a separarme de toda participación en los negocios públicos y volver al seno de mi familia a trabajar en mi profesión de abogado para ocurrir a mis necesidades.

Con tal objeto he dirigido desde el Parral, el día de ayer, el oficio que incluyo a usted para su conocimiento y desde luego me he venido hasta la línea de sus avanzadas a presentarme a usted con el fin de ratificarle mi resolución, en el concepto de que la estimará debidamente y que me considerará comprendido en la gracia que concede el supremo decreto de 2 del mes anterior, porque a más de mi voluntaria separación del servicio público y mi voluntaria presentación a usted, le ruego tenga presente que las disposiciones de ese decreto no me fueron conocidas hasta el día de ayer, que en el Parral me las comunicó privadamente un amigo, pues en todo el tránsito (no) he encontrado autoridad alguna. Con esta confianza me presento a usted como a la autoridad más inmediata y espero merecerle toda su consideración y justicia.

Soy de usted, señor jefe, atento y seguro servidor q. b. s. m.

Manuel Ruiz

Aumento:

Como no es posible imprimir por estos lugares la protesta inclusa, mucho estimaría que si usted lo tiene a bien la mande al punto en que pueda imprimirse, pues así conviene a mi mejor deseo. De usted atento y servidor.

Manuel Ruiz

## MANUEL RUIZ INCONFORME CON LA PRÓRROGA DE JUÁREZ

Ciudadano ministro de Justicia del Gobierno  
Constitucional de la República.  
Chihuahua

Ciudadano ministro de Justicia:

Hoy termina el período ordinario constitucional del ciudadano Presidente de la República, conforme al artículo 80 de la Constitución federal. Desde mañana el Supremo Poder Ejecutivo de la nación solamente se puede ejercer legalmente por el ciudadano presidente nato de la Suprema Corte de Justicia, o por el ministro constitucional que en calidad de presidente accidental lo remplace conforme a la ley, mientras esté impedido. En tal concepto, la prórroga del período ordinario constitucional que el ciudadano presidente se ha concedido por decreto de 8 del corriente, no le otorga ningún derecho para la continuación en el ejercicio del Poder Supremo de la Nación, tanto porque es contraria a las más claras prescripciones del pacto fundamental, como porque lo es también al buen uso de las facultades omnímodas que le concedió el decreto de 27 de octubre de 1862.

La Constitución general en su artículo 82 exige de un modo explícito que al término del período ordinario cese el Presidente de la República, sea cual fuere el motivo que impida la elección del sucesor, o la presencia oportuna del electo y manda qué, entretanto, el Poder Supremo se deposite irremisiblemente en el presidente de la Suprema Corte. La ley de 27 de octubre antes citada, en ningún caso otorga al ejecutivo general el derecho de prorrogarse el mandato nacional, ni el de destruir al legítimo depositario del poder público, ni el de crearse un sucesor, a quien pueda hacer el obsequio de los derechos y libertades de

la nación; por el contrario en ese decreto se le mandó salvar la forma de gobierno establecido en la Constitución y se le prohibió dictar toda providencia que contrariara las prevenciones del título 4º de la constitución, relativas al fuero y consideraciones que otorga a los funcionarios públicos.

Siendo evidente que las disposiciones, que contienen los decretos de 8 del corriente, violan la constitución general y las leyes secundarias, los hombres de honor y conciencia, los que han merecido a la nación un voto de elevada confianza, los que han tenido fe en los principios a tanta costa conquistados y los que han esperado la salvación de la patria de cumplimiento de la ley, tienen muy a su pesar que perder hasta sus más lisonjeras esperanzas y se ven obligados, no sólo a protestar contra la usurpación del poder nacional, sea cual fuere el pretexto que se invoque, sino también a separarse de toda participación en los negocios públicos, hasta que restablecido el imperio de la ley, con él se restablezca el orden.

Por tales causas, ciudadano ministro, yo en mi calidad de ministro constitucional de la Suprema Corte de Justicia, protestando, como solemnemente protesto, contra la violencia y la fuerza que hacen a la ley fundamental y a las secundarias los diversos decretos de 8 del corriente, me retiro a la vida privada, a buscar con mi personal trabajo el sustento de mi familia, llevando a su seno mi conciencia tranquila, porque ella me dice que he cumplido todos mis deberes.

Sírvase usted, ciudadano ministro, hacer presente lo expuesto al ciudadano Presidente de la República, manifestándole que esta resolución en nada disminuye el sentimiento de particular estimación que siempre le he profesado.

Independencia, Libertad y reforma, Hidalgo del Parral, noviembre 30 de 1865.

Manuel Ruiz

SUMISIÓN DE MANUEL RUIZ

Durango, 5 de diciembre de 1865

Telegrama remitido de León el 9 de diciembre de 1865

El Gral. de Castagny al mariscal Bazaine

El Gral. Manuel Ruiz, ministro de la Suprema Corte, se ha entregado al comandante Billot el 1º de diciembre en Rioflorido, declarando que se separa del gobierno de Juárez. El mismo dirigió al presidente, con fecha 30 de noviembre, una protesta contra la prórroga de poder que se ha atribuido Juárez por sus decretos de 8 de noviembre.

Por un correo extraordinario recibiréis un despacho pormenorizado con todos los documentos.

Trasmitido por el

Gral. barón Neigre



SESUDA CRÍTICA DE LERDO DE TEJADA  
A LA PROTESTA DE MANUEL RUIZ

Ciudadano ministro de Justicia,  
Fomento e Instrucción Pública

Con la comunicación de usted de ayer, he recibido la protesta que don Manuel Ruiz dirigió a usted desde Hidalgo del Parral, en 30 de noviembre último, acerca de los dos decretos del 8 del mismo noviembre que se expidieron por este ministerio, relativos a que han debido prorrogarse las funciones del ciudadano Presidente de la República, conforme a las prescripciones de la constitución, mientras el estado de la guerra no permita hacer nueva elección constitucional y a la responsabilidad del ciudadano Gral. Jesús González Ortega, que ha tenido el carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Según anunció el Sr. Ruiz en su protesta, se sabe que ya fue a someterse voluntariamente al invasor; por lo que no sería posible dirigirle ninguna contestación.

Realmente tampoco sería necesario dársela sobre lo que expuso en la protesta, porque sólo contiene frases generales, sin apoyarlas en razón ninguna y sin combatir ni siquiera mencionar ninguno de los fundamentos consignados en aquellos decretos y en la circular con que se publicaron. Puede creerse que para extender su protesta, ni aun consultó el texto de la ley que cita de 27 de octubre de 1862, porque no fue en ésta sino en la de 11 de diciembre de 1861, donde se expresaron los términos a que aludió, sobre la amplitud de facultades conferidas al ciudadano presidente por el Congreso nacional. Sin duda, el Sr. Ruiz quiso referirse a su persona, indicando que le tocaría encargarse del gobierno como magistrado constitucional, que en falta de los anteriores pudiera accidentalmente presidir la Corte de Justicia, por impedimento

del presidente nato de la misma. Tal pretensión sería con toda evidencia infundada.

Los artículos 79 y 82 de la constitución, únicos que tratan del modo de sustituir la falta del Presidente de la República, tan sólo llamaron para ese caso al presidente de la Corte de Justicia y no los otros magistrados que pudieran accidentalmente presidir el tribunal. El Congreso constituyente formó al mismo tiempo la constitución y la ley orgánica electoral de 3 de febrero de 1857, en cuyos artículos 43, 45, 48 y 52, se dispuso que en la época de las elecciones generales deben ser elegidos en el primer día los diputados al Congreso de la Unión, en el segundo día el Presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia y en el tercer día los diez magistrados de número y los cuatro supernumerarios de la misma Corte. De este modo la ley orgánica electoral, en consonancia con lo dispuesto por la constitución, unió la elección del Presidente de la República y la del presidente de la Corte, a fin de que el pueblo pudiera escoger a la vez dos personas que quisiera elegir, para que uno desempeñase el gobierno y en su falta pudiera el otro sustituirlo, distinguiendo y separando la elección del presidente de la Corte de la de los magistrados del tribunal, en quienes no tenía que considerarse la aptitud para el desempeño del gobierno sino sólo para las funciones judiciales.

Así, pues, no se estableció en la Constitución y en la ley electoral, ni habría sido racionalmente posible establecer que, en lugar de uno, hubiera quince vicepresidentes de la república. Es bien sabido que, cuando se presentó en el Congreso una proposición, con objeto de declarar que los magistrados que en falta del presidente de la Corte presidieran accidentalmente el tribunal, pudieran también sustituir la falta del Presidente de la República, el Congreso desechó aquella proposición. Desde entonces quedó juzgada esta materia y fuera de toda cuestión posible; por cuyo motivo, en los decretos de 8 de noviembre, no estimó el gobierno que este punto fuera digno de considerarse, ni que fuese necesario siquiera mencionarlo.

Además de la falta de fundamento de la protesta, puede también calificarse lo que vale por la conducta del que la ha hecho. Si lealmente

hubiera opinado el Sr. Ruiz que era indebida la prórroga de las funciones del ciudadano presidente, pudo protestar contra ella, sin que, en ningún caso, pudiera creer compatible con sus deberes ir a someterse voluntariamente al enemigo. Para esto, no podría alegar ni el temor de ser perseguido, si permanecía en puntos sujetos al gobierno de la República; tanto porque estaba en el caso de sobreponer a cualquiera temor sus deberes de magistrado y de general, como porque no podía abrigar tal temor, conociendo bien los principios y sentimientos del gobierno que ha tolerado siempre todas las opiniones, mientras no pasan a hechos culpables y acabando de ver que el gobierno descansaba en su justificación y había tolerado que después de dictar los dos decretos, se ocupase el Sr. Ruiz de hablar en todas partes, pública y libremente, contra lo dispuesto en ellos.

Cuando se trasladó la residencia del gobierno en agosto último de esta ciudad a la villa de El Paso del Norte, poco después de haber llegado allí manifestó el Sr. Ruiz en los primeros días de septiembre, que había resuelto volver a esta ciudad para dirigirse a la de México al seno de su familia. Esto fue público, porque él mismo lo manifestó a casi todas las personas que habían acompañado al gobierno. Aun llegó a anunciar el día de su marcha, que después estuvo difiriendo, acaso por las dificultades del camino casi desierto, hasta que se recibió la noticia de que esta ciudad iba a ser desocupada por el enemigo. Pretendía entonces excusar su propósito, por falta de salud y escasez de recursos, pues las circunstancias del gobierno en El Paso (del Norte) no permitían que se continuara pagándole algún sueldo.

Sabiendo, como saben todos cuantos acompañan al gobierno, que el Sr. Ruiz estaba resuelto a someterse al enemigo desde principios de septiembre, dos meses antes de la fecha de los decretos referidos, para nadie puede ser dudoso que ha deseado servirse de su protesta, como de un pretexto con que quisiera excusar su abandono de la causa nacional. Ha sido un hecho constantemente observado en San Luis Potosí, en el Saltillo y en Monterrey, que buscaban motivos de oposición contra el gobierno y se dedicaban a censurarlo los que ya habían pensado

abandonar su causa y querían tener algunos pretextos con qué excusar su conducta, para ir poco después a someterse al enemigo.

No se ha empeñado en impedirlo el gobierno, porque nunca ha pretendido que sigan su suerte, sino los que voluntariamente han querido hacerlo en esta época de desgracias y de sacrificios.

Independencia y Libertad, Chihuahua, diciembre 7 de 1865.

(Sebastián) Lerdo de Tejada

ROSAS LANDA AHORA CON LOS IMPERIALES

México, diciembre 1º de 1865

Excelentísimo señor ministro de la Guerra  
México

Excmo. señor:

El día 23, a las tres de la tarde, la columna del Sr. Gral. Lamadrid ha ocupado a Huejutla, sin resistencia alguna. La tropa enemiga que guarnecía aquella plaza, se ha retirado fraccionada, pero el grueso principal sigue estacionado en Tlanchinol, San Sebastián y Molango, en expectativa de las fuerzas que están a mis órdenes en Zacualtipan.

Queda, pues, ejecutada felizmente la parte principal del plan que vuestra excelencia formó contra los sublevados, pues estando ocupados sólidamente Huejutla por el Sr. Gral. Lamadrid y Zimapán y Zacualtipan por las tropas de mi mando, los enemigos tendrán que vivir en la Sierra, faltos de recursos pecuniarios, llenos de privaciones y escaseces, entretanto se les persigue, si antes no se someten, como tengo esperanza de conseguir y de lo cual ya he dado parte a V. E. con anterioridad.

Recibid mis felicitaciones por el suceso que tengo la honra de comunicarle.

Dios guarde a V. E. muchos años.

El general comandante de la  
primera división  
Vicente Rosas (Landa)

## VIESCA Y MÚZQUIZ ACEPTAN LA PRÓRROGA DE JUÁREZ

Gobierno y comandancia militar del estado de Coahuila de Zaragoza

Independencia y libertad, Rosas, 8 de diciembre de 1865

Ciudadano ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación  
Chihuahua

Como este gobierno y comandancia haya recibido el supremo decreto de 8 de noviembre último, que prescribe la prórroga de las funciones del ciudadano Presidente de la República en el presente estado de guerra por el tiempo a que se refiere y la de los poderes de la persona que tenga el carácter de presidente de la Corte de Justicia por el término necesario al objeto de su prorrogación y vea que es conforme al espíritu de la constitución, a los intereses de la República y a la voluntad nacional y, principalmente, de este estado, ha dispuesto, por tanto, que se le dé el debido cumplimiento y, al efecto, lo ha circulado con esta misma fecha a las autoridades y fuerzas que le obedecen y procurará, además, darle la mayor publicidad en el estado.

Tengo el honor de decirlo a usted para su superior conocimiento y el del supremo magistrado de la nación.

Andrés Biseca

Eduardo Múzquiz  
Secretario interino

## EL GRAL. QUEZADA INCONFORME CON LA PRÓRROGA

Ciudadano Jesús González Ortega,  
Presidente Constitucional interino de la  
República Mexicana

En el mes de agosto del año próximo pasado se retiró el gobierno de la ciudad de Chihuahua, trasladándose a El Paso del Norte, haciendo entender a los jefes y oficiales que lo seguían, que podían elegir lugar de residencia en punto no ocupado por el enemigo y que no fuera tampoco El Paso del Norte.

Precisados varios jefes y yo entre ellos, por las anteriores disposiciones, tomamos el rumbo de Presidio del Norte y allí, en unión del Sr. Gral. Negrete, por las inspiraciones de nuestro patriotismo, procuramos reunir algunos elementos para hostilizar al enemigo; dos meses transcurrieron así, en que adquirí el desengaño de que, agotados los recursos del estado y sin iniciativa por parte del ejecutivo, eran estériles todos nuestros esfuerzos. Vacilaba entre penetrar a la república a unirme con otras fuerzas o tomar el camino del extranjero para reunir elementos de guerra, cuando tuve motivos de percibir que se tramaba seriamente la perpetuación del Sr. Juárez en el poder, lo que realmente decapitaba la defensa nacional y convertía al ejército en escolta de un usurpador.

Yo entré en la carrera de las armas apadrinado por la causa de la libertad; quise tomar mi carta de ciudadanía en el campo de batalla, porque entonces se combatía por las libertades y la regeneración de los pueblos y coincidiendo el principio de mi carrera con el advenimiento al poder del Sr. Juárez, ni tuve otra bandera ni otro nombre que invocar, ni más causa que con la que él ha estado identificado.

Su transformación en revolucionario era su desaparición del orden legal y la fuerza no podía servirle sino como instrumento propio para intereses absolutamente personales. Los males que entonces preví, los sentimientos que desde ese momento me animaron y mi reconocimiento a la persona de usted como Presidente de la República, después del 30 de noviembre, se los hice presentes por medio de un comisionado que le mandé a Nueva York en agosto último, viniendo a residir a esta ciudad, donde procuré, como a usted consta, utilizar hasta donde ha sido posible mis servicios en favor de nuestra común causa.

Esta es la sencilla explicación de mi conducta; la creo plenamente justificada, no sólo por el testimonio íntimo de mi conciencia; no por el texto expreso de las leyes cuyo tenor inequívoco condena al Sr. Juárez; no por la conciencia pública que transportándose (sic) ofrece el espectáculo de la pérdida dolorosa de una de nuestras glorias, porque gloria nacional era el nombre del Sr. Juárez, sino por la subversión del orden legal y los peligros de la misma independencia, porque los gobiernos para ser fuertes, tienen que ser justos y la usurpación lleva en sí misma los gérmenes de la debilidad y del aniquilamiento. Yo, el último de los ciudadanos, pero, como cualquiera de ellos a mi vez, expresión de la conciencia nacional, he querido protestar con mi conducta, contra el golpe de estado del Sr. Juárez, para dar un testimonio de que, entre todas las clases y de parte de todos los individuos que aman al país, hay un sentimiento unánime contra esta perversión del buen derecho de la nación; contra el conato criminal de hacer divisible la causa de la ley de la causa de la patria y contra el hecho probable de dar motivos en lo presente a la anarquía y a la guerra fratricida, en medio de la invasión extranjera y de aun triunfantes que quede a la nación en la convalecencia de males sin cuento, la terrible herencia de la guerra civil y de una dictadura caprichosa.

Una vez expuestos mis sentimientos y con la conciencia de que usted está investido del poder legal en la primera magistratura de la nación, me presento a las órdenes de usted para que me emplee aunque sea como último soldado en la defensa de la independencia nacional.



Independencia y Libertad, San Antonio de Béjar, diciembre 18 de  
1865.

M. Quezada

GONZÁLEZ ORTEGA CITA AL GOBERNADOR VIESCA  
PARA CONFERENCIAR

Piedras Negras, diciembre 20 de 1865

Sr. gobernador don Andrés S. Viesca  
San Fernando

Muy señor mío y de mi respeto:

Deseo tener con usted una conferencia sobre asuntos de la más alta importancia respecto de nuestra patria; llegué un poco malo y esto me impide dirigirme en el acto hacia el punto en que usted se encuentra. A los intereses de la nación conviene pues muchísimo que usted se sirva dar una carrera a este punto, hoy mismo o mañana por la mañana.

Le suplico a usted que no atribuya usted esto a una exigencia mía. El carácter de la situación en que se halla México, no me permite demorarme en este punto sino pocas horas.

Conservo hasta el momento en que escribo esta carta el incógnito. Resérveme usted esta especie. A nuestra vista le diré qué razones de interés nacional me obligan a proceder de esta manera.

Reservándome darle un abrazo, me repito de usted su servidor.

Jesús González Ortega

Como ignoro si usted conoce o no mi firma y como me supongo que en el último caso usted podrá tener esta carta como apócrifa y atribuirle a un medio para ponerle una celada, para evitar esto van unas cuantas líneas del Sr. Zenca.

(González) Ortega

Señor gobernador:

Yo mismo debía apersonarme a usted con el objeto de darle cuenta del resultado de mi viaje; pero estando mi caballo inútil no puedo hacerlo de momento. Aquí el Sr. Gral. (González) Ortega me ha indicado el objeto de poner este párrafo y lo hago con gusto, repitiéndome a sus órdenes como seguro servidor que su mano besa.

B. L. de Zenca

Si tuviere algún impreso de Chihuahua, le agradecería que se lo trajera.

GONZÁLEZ ORTEGA  
PRESENTA SU PROTESTA POR LA PRÓRROGA

A don Sebastián Lerdo de Tejada

El acto inmoral e impolítico que ha consumado don Benito Juárez al expedir, por conducto de usted, los decretos de 8 de noviembre próximo pasado, me ha puesto en el penoso caso, atendidas las circunstancias en que se halla la República Mexicana, de protestar, como lo hago, ante la misma nación, contra el contenido de esos decretos:

1º Porque son contra lo expresamente prevenido por la constitución política de la República y, en consecuencia, ilegales, arbitrarios e injustos.

2º Porque crean una dictadura que ejercerá don Benito Juárez, quien puede quitar y sustituir a su arbitrio a las autoridades de uno de los poderes federales, independiente y soberano y cuyas facultades y nombramiento ha recibido por el voto de la nación, destruyendo, de este modo, un principio republicano y la base del orden legal, que es la forma de gobierno establecida en la constitución.

3º Porque son contra las facultades delegadas al poder ejecutivo por el Congreso, cuya Cámara, no obstante la guerra que México sostiene contra la Francia, le dijo al concedérselas en su decreto de 11 de diciembre de 1861: "queda facultado omnímodamente para dictar cuantas providencias juzgue convenientes en las actuales circunstancias, sin más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios y Leyes de Reforma" y en la ley de 27 de octubre de 1862 le puso la terminante y expresa restricción: que no podía contrariar las prevenciones del título IV de la constitución, esto es, que no podía

declarar si había o no lugar a proceder contra los funcionarios públicos; restricción que tuvo por único objeto evitar que el presidente abusara del poder y destruyera el orden constitucional.

4° Porque esos decretos comprometen seriamente la independencia nacional, quitándoles a sus defensores un gobierno legítimo, único que puede servirles de centro, de unidad y de bandera y sustituyéndolo con otro ilegal, que no tiene más título que un decreto anticonstitucional que acaba de expedir.

5° Porque ellos importan un insulto al pueblo mexicano y a los que han combatido por sus derechos y en torno de su bandera, al suponerse o inferirse claramente de su texto que la sangre derramada por ese mismo pueblo, sus millares de víctimas y sus esfuerzos heroicos de todas clases en sostén de un principio, no han tenido otro objeto que la defensa de la persona de don Benito Juárez y que si esa persona no salva a México, México es impotente para hacerlo por sí mismo.

6° Y porque en los fundamentos en que se apoyan esos decretos no sólo se ha hecho uso del sofisma, sino que se ha recurrido hasta a la calumnia por lo que toca a mi persona.

El juramento solemne que he prestado como presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia, teniendo por base la constitución de la República, queda leal y patrióticamente cumplido por mi parte e incólumes la voluntad nacional y derechos del pueblo consignados en aquel código. La nación, al recobrar sus derechos, exigirá a los infractores de la ley la responsabilidad respectiva.

Paso del Águila, diciembre 21 de 1865.

Jesús González Ortega

## MANIFIESTO DE GONZÁLEZ ORTEGA CONTRA LA PRÓRROGA

El ciudadano Jesús González Ortega, presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la República Mexicana, a la nación

Mexicanos:

Don Benito Juárez ha expedido, el día 8 del mes de noviembre próximo pasado, en el Paso del Norte, por conducto de don Sebastián Lerdo de Tejada que funcionaba como ministro de Relaciones y Gobernación, dos decretos; prorrogando en uno de ellos el ejercicio de sus funciones y destituyendo por medio del otro al presidente de la Suprema Corte de Justicia; aunque con distintos pretextos alegados en ese decreto, por la única y exclusiva razón de ser el que por la voluntad nacional expresada así al hacer en su persona la elección de vicepresidente de la república y por un precepto constitucional bien terminante, debía de encargarse del Poder Ejecutivo de la unión, desde el día 1º del presente mes de diciembre.

No era extraño este paso del Sr. Lerdo de Tejada si se recuerda su carrera política, si se recuerda que fue una de las personas que cooperaron al golpe de estado de Comonfort; golpe que dio un escándalo al mundo y escribió una página de sangre en la historia de México.

Al tocar de nuevo el suelo patrio, a donde me han traído el honor y el deber, a donde he venido a cumplir con la consigna que recibir no de don Benito Juárez, sino del voto espontáneo del pueblo mexicano, lo primero que se presentó a mis ojos fue su risueño horizonte, su suelo empapado en sangre y la destrucción de su edificio político, a tanta costa levantado. Lo primero que vi fue los decretos que presentaban oscuro y nebuloso su porvenir. Tras de esos decretos vi la anarquía y el desorden,

tras ellos vi un ultraje al pueblo mexicano; tras ellos vi las consecuencias todas de un acto reprobado por la moral y la experiencia y un escándalo más en la historia de nuestros gobernantes que han hecho de la ley lo que más se acomodaba a su ambición e intereses personales y no a la voluntad de los pueblos. Un pensamiento fecundo en bienes al sistema republicano había pasado por la frente de los mexicanos, el pensamiento de que aquellos escándalos habían desaparecido para siempre de nuestra esfera política, no quedándonos de ellos sino la huella dolorosa de los males que han causado.

La primera idea que me vino fue posponerlo todo a la salvación de mi patria. ¡Mi patria por cuyo bienestar, glorias y honor, ni he economizado ni economizaré sacrificio alguno, sea de la magnitud que fuere! Mi carrera pública, si no dilatada, al menos sin mancha, es el testimonio más claro de la verdad de mis sentimientos.

Dos caminos se presentaban para la realización de mi idea.

Uno, enmudecer, no decir una palabra respecto de la ilegalidad de los decretos de que me ocupo, sacrificando aun mi propio honor en aras de la patria y retirarme al extranjero, para que los amigos de la legalidad, los partidarios de los derechos del pueblo y de las formas constitucionales, no tuvieran otra bandera que seguir que la que acababa de alzar la arbitrariedad.

El otro, protestar contra esos decretos y dejar a la nación incólumes sus derechos; no levantar una nueva bandera; porque esto sería agregar a un acto escandaloso, un acto imprudente, pero no presentar tampoco un desertor en mi persona, destruyendo así la encarnación de un principio.

Seguir por el primero, era disponer a mi arbitrio de derechos que no me pertenecen y que corresponden a la nación que me los trasmitió con sus votos; era conculcar el juramento que he prestado ante la representación nacional; era no cumplir con la consigna que recibí de los pueblos, anteponiendo a ella una modestia punible; era abandonar el camino recto y seguro para seguir otro, bueno o malo, pero que no es el que el honor y el deber han marcado. Por otra parte, era dejar a la nación sin la posibilidad de establecer un gobierno legal, único con que ha podido hacer frente a su colosal enemigo y sostener con honor sus

derechos y era autorizar un nuevo atentado contra la ley, de esos atentados que harán siempre que sea del todo imposible la existencia de una república y la paz de una nación.

Adoptar el segundo, era cumplir con un deber, era decirle a la nación que no he cooperado ni tácita ni expresamente al golpe que sus instituciones y su forma constitucional acaban de recibir; era dejarle expedito el camino para demostrar al mundo que la obra de dos hombres no es la obra de un pueblo, que el extravío de dos hombres no es ni puede atribuirse a un extravío nacional, cuyos intereses son de un origen más elevado; que México defiende y ha defendido principios y que, en este punto, debido a sangrientos y supremos esfuerzos, se ha colocado en los últimos diez años al nivel de los pueblos más cultos de la tierra; era, por último, decirle a la nación, cuál ha sido mi conducta. El sacrificio de mi silencio no creo que influya, bajo ningún aspecto, en mejorar por nuestra parte la condición de la guerra.

Seguí, pues, este último y dirigí a don Sebastián Lerdo de Tejada la protesta respectiva contra los decretos anticonstitucionales de que he hecho mención.

#### Artículos Constitucionales

Art. 78. El presidente entrará a ejercer sus funciones el primero de diciembre y durará en su encargo cuatro años.

Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 80. Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Art. 82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1º de diciembre en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo y



el supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 94. Los individuos de la suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento ante el Congreso y en sus recesos ante la diputación permanente, en la forma siguiente: «¿Juráis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo conforme a la constitución y mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?».

Art. 95. El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente,

#### Título IV

#### De la responsabilidad de los funcionarios públicos

Art. 103. Los diputados al Congreso de la unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los gobernadores de los estados lo son igualmente por infracción de la constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la República; pero durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.

Art. 104. Si el delito fuese común, el Congreso erigido en gran jurado declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

Art. 105. De los delitos oficiales conocerán: el Congreso como jurado de acusación y la Suprema Corte de Justicia como jurado de sentencia.

El jurado de acusación tendrá por objeto declarar, a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no culpado. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo y será puesto a disposición de la Suprema Corte de Justicia. Ésta, en tribunal pleno y erigida en jurado de sentencia, con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta de votos, la pena que la ley designe.

Art. 106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la gracia de indulto.

Art. 107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse durante el período en que el funcionario ejerza su encargo y un año después.

Art. 108. En demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad para ningún funcionario público.

Al conceder el Congreso facultades extraordinarias al Ejecutivo, a consecuencia de la guerra, le puso, por medio del decreto de 27 de octubre de 1862, la expresa y terminante restricción de que no podía contrariar las prevenciones del título IV de la constitución; sin que pueda inferirse que haya tenido otra razón el Congreso que la de salvar el orden constitucional poniendo a cubierto a los altos dignatarios de la República de los tiros del Ejecutivo, temiendo que éste abusara del poder y declarara que había lugar a proceder contra éste o aquel funcionario, y destruyera así el orden político existente, como acaba de hacer contra lo prevenido por la constitución, contra las facultades que le concedió el Congreso y contra toda razón notoria de conveniencia pública.

Según el artículo 95 de aquel código —la Constitución—, el cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la

renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la diputación permanente. Baste decir sobre esto que no he hecho renuncia alguna del cargo de presidente de la Corte, ni ha habido causa grave que la motive y, en consecuencia, que ni la ha calificado el Congreso ni la diputación permanente.

He insertado los artículos constitucionales que preceden para que se vea de su simple lectura su notoria infracción, no para refutar con su texto los fundamentos en que se apoyan los decretos de 8 de noviembre. Esto último sería hacer un insulto a la conciencia pública y al buen sentido.

En los decretos mencionados y circular que los acompaña, se ha querido dar a la nación una cátedra de lógica y una explicación de nuestro derecho constitucional. A estos medios, débiles en verdad, tiene que recurrirse siempre que faltan principios legales y razones sólidas en qué apoyarse. Ni como magistrado ni como mexicano quiero tocar esto. La nación juzgará. A mí sólo me toca, por ahora, narrar lo que está colocado en la esfera de los hechos. ¡Ojalá y pudiera revelarlo todo! ¡Esto pondría de manifiesto mi conducta y explicaría la de los Sres. Juárez y Lerdo de Tejada! No muy patriótica se presentará la de los últimos. A los intereses nacionales corresponde por ahora callar.

El golpe de estado dado por Comonfort el año de 1857, hizo que don Benito Juárez, como presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia, entrara a ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión. Restablecido el orden legal después de una guerra de más de tres años, que fue la consecuencia de aquel golpe, se reunió el Congreso en 1861 y no habiendo persona que con un título más o menos legal sustituyera al Presidente interino de la República, en caso de falta, por estar desempeñando este encargo el presidente constitucional de la Corte, se nombró un presidente de la misma Corte, con el carácter de interino, mientras se hacía la elección en los términos señalados por la constitución. Aquel nombramiento recayó en mi persona.

Había sido nombrado en esos mismos días, por el voto popular, gobernador del estado de Zacatecas.

Presté el juramento respectivo ante la representación nacional como presidente interino de la Corte, tomé posesión de este encargo y marché pocos días después para la ciudad de Zacatecas, a encargarme, como me encargué, del gobierno constitucional de aquel estado.

Esto pasaba el año de 1861: y tanto los últimos meses de ese año, como todos los primeros del de 1862, estuve alternativamente desempeñando el gobierno constitucional de Zacatecas, el gobierno y comandancia militar del estado de San Luis Potosí y las comandancias militares de los estados de Aguascalientes y Tamaulipas; lo último por disposición del gobierno y a consecuencia de la guerra.

En todo este período no vieron la nación, la diputación permanente, o el Congreso a su vez cuando se encontró reunido, el abandono por mi parte del cargo de presidente interino de la Corte, o la incompatibilidad que ahora encuentran los Sres. Juárez y Lerdo de Tejada y para lo que han tenido que recurrir a la autoridad de constituciones no vigentes, a fin de encontrar lo que no hallaron en la que es actualmente el pacto político de la nación.

El Congreso quiso sólo que hubiera una persona con un título cierto y reconocido que sustituyera, si llegaba el caso, al Presidente de la República y no un individuo que estuviera presidiendo los actos de las funciones ordinarias de la Corte. Las exigencias políticas de aquella época y más en tiempos de guerra, quedaban satisfechas con el nombramiento, importando poco que la persona nombrada fuera o no gobernador de Zacatecas.

Puede haber algún inconveniente, en tiempos normales, para el desempeño de ambos cargos; pero de esto no se ha ocupado la constitución, ni yo he pretendido desempeñar ambos a la vez. La guerra y la situación de mi patria me han llevado, no al puesto que halaga mi conveniencia particular, sino al punto que mi conciencia, mi honor y mi deber me han señalado para ser más útil al suelo en que nací. He creído también con esto, dejar satisfecho lo que de mí reclamaría la nación como soldado del pueblo. He referido todo lo anterior, sin querer sacar de ello un argumento. Sólo cito hechos que ha presenciado todo el mundo y autorizándolos tácitamente el soberano.

Durante mi permanencia en Zacatecas y San Luis (Potosí) y separado de la capital de la República, el pueblo hizo la elección de presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia, cuyo nombramiento, previa la declaración de la Cámara, recayó en mi persona no obstante la oposición que le hizo el gobierno de don Benito Juárez con su influencia y su poder.

En esta época tenía también yo el carácter de gobernador constitucional de Zacatecas. Esto no obstante, presté, a mi tránsito por la capital de la República en 1862, el juramento como presidente constitucional de la Corte, tomé posesión de este encargo el mismo día y marché al siguiente a incorporarme, con la división que mandaba, al ejército de oriente.

Poco después me encargué con el carácter de general en jefe del mando de dicho ejército y un poco más tarde del gobierno y comandancia militar del estado de Puebla, que desempeñé hasta la mitad del año de 1863, teniendo al mismo tiempo el doble carácter, como he dicho, de gobernador constitucional de Zacatecas.

Tampoco en todo este tiempo vio la nación, la diputación permanente o el Congreso el abandono de mi parte de la presidencia de la Corte, o la incompatibilidad de que se ha hecho mérito. He estado donde debía estar como soldado.

Al haber caído prisionero en la plaza de Puebla, aparecieron algunas proposiciones en la Cámara, las que tenían por objeto hacer el nombramiento de una persona que me remplazara. Ellas no fueron atendidas, porque hecho el nombramiento en mi persona de presidente de la Corte, con arreglo a los preceptos constitucionales, cualquiera otro nombramiento en este sentido sería anticonstitucional. Así consta de las actas de las sesiones que se publicaron en esos días.

Libre de nuevo por la fuga de mi prisión, de la ciudad de Orizaba, regresé a la de San Luis (Potosí) donde se hallaba el gobierno general, instalé la Corte y me dirigí en seguida al estado de Zacatecas, no abandonando la presidencia de la Corte, como malamente se ha dicho, sino previos los requisitos que exige el reglamento interior de aquel cuerpo.

Antes de mi marcha y de mi separación de la Corte, manifesté a los magistrados que el escaparme de la prisión y no haber querido comprometer en lo más mínimo mi palabra de honor, fue con el objeto de quedar expedito para seguir luchando por la independencia de México y que estando su salvación en la guerra y no en las cuestiones de la esfera judicial, me dirigía al estado de donde era hijo y gobernador para presentar con las armas nuevos obstáculos a los invasores. Mis compañeros aprobaron esa resolución. Un poco más tarde me concedió la Corte la licencia que solicité. Ocupaba ya entonces el gobierno de Zacatecas.

Yo había organizado distintas veces y conducido con fortuna en campañas anteriores a las tropas de Zacatecas; yo había sido uno de los caudillos de aquel estado en la revolución reformista y establecimiento del orden legal; yo era hijo de ese mismo estado y había recibido de él los empleos y distinciones más honoríficas; yo había sido su gobernador durante cinco años y lo era entonces por elección popular.

Esto, como era natural, me daba una no pequeña influencia en la cosa pública de aquel pueblo. Mi conciencia y, sin temor de equivocarme, puedo asegurar que la conciencia de mis conciudadanos, sólo reclamaban mis atenciones en la organización y al frente de tropas en los momentos solemnes de la patria.

Así es de suponerse que juzgará también el gobierno de la unión. La escena no había cambiado; las exigencias de la guerra, si no eran las mismas, es porque habían subido algunos grados en el termómetro de la desgracia por la pérdida de México y Puebla; pero intereses personales cubiertos con distinto ropaje se sobreponían al bien público.

No se había creído necesaria mi permanencia en la Corte en los años anteriores; tampoco se creyó antes de encerrarme en las murallas de Puebla. Entonces se hallaban en pie los órganos del pueblo, velando sólo por los intereses y honor de éste.

El gobierno sólo trataba de nulificarme; sólo trataba de que no adquiriera nueva influencia en los destinos públicos por servicios prestados a la patria. Así convenía a proyectos ulteriores.

Mi colocación al frente de tropas y de un estado demócrata y respetable, si era uno de los muchos obstáculos que México presentara a la invasión, era también un centinela que velaría por los fueros e inmunidades de la ley y un inconveniente para disponer del poder público como de propiedad particular.

El gobierno del Sr. Juárez, en vez de utilizar en pro de México mi poca o mucha influencia en Zacatecas, dio principio a intrigas privadas para colocar las cosas y las personas en otra esfera, para nulificar aquélla. El mismo Sr. Juárez escribió particularmente a don Severo Cosío, persona que funcionaba de gobernador de Zacatecas. Lo halagaba con la continuación en el poder. El patriota Sr. Cosío, como era un asunto particular donde sólo se trataba de las opiniones del presidente, contestó al Sr. Juárez también con un carácter particular: que mi vasta influencia en aquel estado con la investidura que tenía de gobernador, era conveniente y hasta cierto punto necesaria, si se atendía a que en esos momentos se trataba de la defensa del mismo estado.

Continuaron las intrigas. Vinieron después comisionados por agentes del gobierno a hablar y a hacerle proposiciones de mando al Gral. don Victoriano Zamora. El Sr. Zamora había sido gobernador constitucional del mismo estado en años anteriores. La guerra civil podía estallar en Zacatecas por los manejos privados del gobierno y esto en los momentos mismos en que el ejército francés penetraba al interior de la República y en que Zacatecas estaba próximo a ser invadido.

El gobierno sabía que si declaraba en estado de sitio a aquel estado para nombrarle un gobernador a su arbitrio, su orden sería por mí acatada y cumplida; pero también sabía que este acto sería reprobado por el estado, que es uno de los más celosos por sus instituciones y uno de los que más podía ayudar en la defensa de la independencia bajo su régimen constitucional. Sabía también que en esta medida no vería otra cosa la nación, que un acto dictado con solo el objeto de nulificar mi persona por miras puramente personales.

Todas estas intrigas se estrellaron en el patriotismo y buen sentido de los habitantes de aquella parte de la República.

La patria lo reclamaba todo. Era necesario hacer a un lado lo personal y colocar al frente sólo los intereses públicos. Mandé con este objeto una comisión a la ciudad de San Luis (Potosí), compuesta de los Sres. diputados licenciado don José María Castro y coronel don Jesús Loera, a fin de que expusieran al gobierno de una manera respetuosa la resolución firme que tenía Zacatecas de organizar fuerzas y defenderse en su calidad de Estado y cual correspondía a su buen nombre y dignidad, teniendo siempre sus fuerzas a disposición del supremo gobierno. Llevaba también la comisión el encargo de suplicarle que no le presentara tantos tropiezos y dificultades al gobierno particular de Zacatecas, para llenar su patriótica misión. El estado se comprometía por mi conducto a dar mensualmente las cantidades que se le señalaran.

El gobierno general había apelado al medio de colocar agentes en el estado con el pretexto de agenciar recursos ostensiblemente; pero con el objeto real de presentar dificultades para impedirme la organización de tropas. Si recursos quería el gobierno general, recursos le ofrecía la comisión, pidiéndole sólo que señalara las cantidades.

Tuvieron algunas conferencias el Sr. Juárez, algunos de sus ministros y la comisión. Ésta no pudo obtener una resolución satisfactoria. Nada había más natural; tenían al frente y en tenaz oposición a dos ministros agentes secretos del enemigo como lo demostraron ellos mismos, llegando pocos días después a su punto de vista, a la traición. Esos ministros, en su alto empleo, era natural que causaran todos los males que pudieran a la república, complicando más su difícil y violenta situación y más si se atiende a que estaban apoyados decididamente por el mismo Sr. Juárez; porque ellos a su vez lo supieron halagar con su permanencia en el poder.

La respuesta definitiva que obtuvo la comisión, fue que me manifestara que el gobierno no podía retirar sus agentes y que además no necesitaba ya fuerzas porque le eran suficientes las que mandaban los Grales. Doblado y (López) Uraga.

La comisión me dio cuenta del resultado de su encargo y de su informe inferí: Que la mano hipócrita de la traición se hallaba en el gabinete. ¿Cómo no necesitar fuerzas para la defensa de la independencia



cuando un ejército extranjero invadía el territorio nacional? ¿Cómo no necesitarlas cuando se había destruido en Puebla el ejército de oriente? Aún me quedaba para obrar mi conciencia de mexicano y mi deber como gobernador de Zacatecas.

El Sr. Juárez salió pocos días después del estado de San Luis (Potosí) dirigiéndose al de Coahuila, a consecuencia de la pérdida de la división que le servía de escolta y que mandaba el Gral. Negrete.

El diputado don Trinidad García de la Cadena fue en esos días al Saltillo a desempeñar una comisión del gobierno de Zacatecas cerca del Sr. Juárez. Concluida su misión oficial, fue invitado por el ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación Sr. Lerdo de Tejada para una conferencia privada; se prestó a ella el Sr. Cadena y oyó del ministro proposiciones que halagaban su ambición de mando. Se le propuso que a mi primera salida de la ciudad de Zacatecas se apoderara del gobierno de aquel estado, apoyándose en las fuerzas que mandaba como coronel; se le dijo que el gobierno aprobaría esta medida y le daría después el despacho de gobernador.

El Sr. García de la Cadena, hijo de Zacatecas, a quien ha prestado con las armas y en la esfera política importantes servicios, rehusó aceptar aquellas proposiciones, objetando que hacer lo que se le proponía era llevar la guerra civil a su estado, en vísperas de ser invadido por un ejército enemigo. Las intrigas aún no habían concluido.

El mismo Sr. Cadena me dijo al darme cuenta de su comisión oficial: "Noté en todas las conferencias que tuve en el Saltillo con el Sr. Lerdo de Tejada y sus agentes, que hay gran empeño porque se destruyan las fuerzas que usted ha organizado y continúa organizando. Se les teme, porque se teme también la llegada del término del período ordinario del Sr. Juárez. El Sr. Lerdo desea afirmar su empleo de ministro".

Mis relaciones con el gobierno general continuaron ostensiblemente en la mejor inteligencia y buena armonía. Los sucesos de la guerra lo arrojaron a más de 150 leguas de Zacatecas y los hechos le vinieron a testificar que tenía necesidad de las fuerzas que me ocupaba en organizar.

En uno o dos meses levanté, equipé y armé una fuerte división de las tres armas. Esa misma fuerza, levantada en medio de tantas intrigas y contra la voluntad del Sr. Juárez, no sirvió sino para cooperar dos distintas veces y de una manera bien eficaz, a la salvación de su persona y en consecuencia a la del gobierno legítimo y para obedecer ciegamente las órdenes que recibí del mismo.

He aquí las consecuencias del abandono que, se dice, hice de la presidencia de la Corte en San Luis (Potosí).

Me hallaba aún en el estado de Zacatecas al frente de la división que había organizado, cuando llegó a mi conocimiento, por conductos fidedignos, la traición que preparaba en el sur de Jalisco don José López Uraga, que mandaba como general en jefe las fuerzas más respetables con que contaba la República.

Puse esto repetidas veces en conocimiento del Sr. Juárez para que se dictaran medidas eficaces respecto de aquel general y se evitara así la destrucción de nuestro ejército.

El Sr. Gral. Corona había militado a las inmediatas órdenes de (López) Uraga; cuando se impuso de la traición de éste, pidió su pasaporte, y se retiró; tocó al estado de Zacatecas y tuvo conmigo una conferencia relativa a aquella traición.

Dio sobre esto al gobierno una relación minuciosa y oficial, poniendo los pliegos en mis manos para que por mi conducto le fueran remitidos. Así lo hice, mandándolos con un comisionado especial. Este comisionado fue el capitán don Marcelino E. Caveró, oficial que también acababa de separarse de las fuerzas de (López) Uraga. Caveró debía dar al gobierno informes verbales.

Se me presentaron sucesivamente otros jefes procedentes del mismo sur de Jalisco; contestes me aseguraron todos que los datos de la traición de (López) Uraga los había remitido el ilustre y patriota Gral. Arteaga al gobierno. Últimamente he visto corroborado esto en una carta firmada por aquel malogrado general.

El Gral. don Felipe B. Berriozábal pasaba de tránsito en esos días por el estado de Zacatecas. Me invitó para una conferencia a fin de

ponerme al corriente de la traición que se proyectaba en Jalisco. Graves atenciones militares me impidieron presentarme a esa invitación.

El Sr. Berriozábal sin pérdida de tiempo se dirigió a los estados de Coahuila y Nuevo León, que ocupaba entonces el gobierno.

Hizo presente a éste la traición referida y exhibió las pruebas más concluyentes de ella como era la invitación que con aquel objeto se le dirigió. Hizo más; acusó ante el gobierno, en toda forma, a (López) Uruga, por el delito de traición.

A nada se atendió. El Sr. Juárez dio por única respuesta la siguiente: que si se había invitado al Sr. Berriozábal para traicionar, fue sin duda con el objeto de poner a prueba su constancia y firmeza.

Este general, en vista de lo anterior y del apoyo con que contaba (López) Uruga en los Sres. Juárez y Lerdo, retiró la acusación y remitió al gobierno una comunicación oficial, si bien respetuosa, concebida en términos enérgicos, pidiendo en ella que o se le vindicaba de los cargos que contra él hacía (López) Uruga, o hacía publicar documentos bien deshonorosos para el mismo (López) Uruga y para el gobierno. Éste concedió lo que se pretendía. El Sr. Berriozábal entonces sólo dio a luz la comunicación de que he hecho mérito y la contestación en que se le vindicaba, guardando silencio respecto de los documentos a que aludía.

Nada quiso oírse, nada quiso escucharse tenazmente por los Sres. Lerdo y Juárez. Nada valía el dicho y datos exhibidos por personas caracterizadas; nada valían lo que reclamaba el honor de México, la moralidad de nuestro ejército y la salvación de elementos necesarios para la defensa decorosa de la independencia nacional.

Era conveniente que se destruyeran esos elementos creados, como todo el mundo sabe y lo ha visto, por los estados de la confederación con sus recursos y esfuerzos particulares; era necesario destruir el sostén del orden constitucional, para crear otros agentes y otros elementos, a fin de perpetuar, cuando fuera oportuno, el mando en manos del Sr. Juárez. Digo esto porque no tengo otra explicación que dar a los hechos anteriores. Además me autorizan para decirlo los hechos mismos y lo que he oído de los labios del Sr. Lerdo. "Nada importa la destrucción de lo

existente; las grandes causas se salvan por sí mismas; nuestra cuestión por hoy es vivir".

A nadie se ocultan los muchísimos medios de que puede disponer un ministro para complicar una situación y hacer que se destruyan por sí mismos los elementos en que descansa un orden político. A nadie se oculta que esto pueda hacerse sin responsabilidad ostensible ante las masas, aunque no de la misma manera ante el juicio severo de la historia. A nadie se oculta la facilidad con que pueden ponerse en práctica maquinaciones de esta naturaleza, cuando hay un ministro que gobierna a su arbitrio, una vez que sabe halagar la pasión dominante de un presidente.

Se hallaban en la ciudad de Zacatecas dos fuertes divisiones de las tres armas con un gran tren de artillería. Mandaba una de éstas el Gral. Doblado; la otra estaba a mis órdenes. De ambas podía disponer el gobierno, como lo hizo cuando lo estimó por conveniente. Ambas se hallaban a unas cuantas jornadas de la plaza de San Luis. Esto no obstante, se dio orden terminante al Gral. Negrete para que atacara aquella plaza con sólo la división que se hallaba a sus órdenes.

Quedó ésta destruida completamente en el ataque. Después fue derrotada también aisladamente en Matehuala la división del Gral. Doblado. Más tarde concluyó la mía en Majoma.

En una conferencia que tuve con el Sr. Juárez en Monterrey, en presencia del ministro de la Guerra, le hice notar que no era remoto que la nación juzgara de una manera desfavorable al gobierno y a los que teníamos en nuestras manos los elementos de su defensa, por la pérdida en fracciones de esos mismos elementos, porque aunque no hubiera estas intenciones, los hechos parece que las demostraban.

En agosto del año pasado se acordó la retirada del gobierno y de nuestras fuerzas de los estados de Nuevo León y Coahuila.

El Sr. Gral. Negrete, estando entonces encargado de la cartera de Guerra, fue revestido con el doble carácter de general en jefe de nuestras fuerzas. Se componían éstas de dos divisiones. Mandaba una el Gral. Alcalde; la otra estaba a mis órdenes, siendo la misma que organicé en Zacatecas.

En la ciudad de Saltillo recibí orden del general en jefe para marchar al punto de la Angostura, ponerme al frente de las dos divisiones y dar una batalla ese día si el enemigo se prestaba a librarla; y en caso contrario retirarme con las fuerzas la noche de ese mismo día rumbo a la villa de Monclova. Así lo hice habiendo puesto en práctica lo segundo por no haber tenido lugar lo primero.

Poco después de mi retirada me uní con el Gral. Negrete que tenía su cuartel general en el Saltillo. A la mañana del día siguiente las fuerzas y el gobierno quedaron reunidos. De esta manera se caminó hasta la hacienda del Anheló.

De este punto resolvió el gobierno marchar por la vía de Parras para Chihuahua. Arrastró consigo al Gral. Negrete, que era el ministro de la Guerra.

La responsabilidad de salvar a nuestro ejército se confió a mi cuidado, aunque de una manera tácita porque no recibí nombramiento alguno de general en jefe, sino la orden de seguir a retaguardia por la vía que el gobierno llevaba. Son de notarse las circunstancias en que se me dejó esta responsabilidad.

El ejército no tenía en lo absoluto víveres de alguna clase; no contaba con un solo peso en sus cajas, se encontraba en los puntos más despoblados del territorio nacional y tenía que pasar por una gran parte del penosísimo desierto que carecía aún de grano y pastura para el ganado. En ese mismo desierto estaba expuesto a ser cortado por el ejército francés y en momentos en que tocara casi a su aniquilamiento físico por falta de los elementos que he mencionado.

Es también de notar, que si el ejército no contaba con un solo peso para cubrir sus más imperiosas necesidades, no era por falta de medios que pudieron haberse puesto en práctica anticipadamente y más cuando su retirada había estado proyectándose hacía más de dos meses.

El gobierno acababa de abandonar una plaza que había ocupado por algunos meses, de grandes recursos, como era la de Monterrey y podía disponer y disponía de los productos de las aduanas fronterizas de Matamoros y Piedras Negras.

Emprendí la marcha de conformidad con las órdenes que había recibido. En el camino di aviso al gobierno que el ejército francés se hallaba de nuestras fuerzas a cuatro leguas de distancia. En contestación recibí una carta-orden firmada por don Sebastián Lerdo de Tejada. Me decía en ella que abandonara y perdiera toda nuestra artillería y trenes, limitándome a salvar el personal de nuestro ejército, a cuyo efecto podía tomar un camino excusado y a propósito.

Rápida y violentamente contesté al Sr. Lerdo de Tejada que el cumplimiento de la orden que acababa de recibir, daría por resultado no salvar el personal de nuestro ejército, porque abandonábamos voluntariamente los elementos que teníamos para hacerlo, dejando al mismo tiempo comprometido el honor de nuestras armas. Le dije también que si no obstante mis observaciones, el gobierno insistía en aquella orden, se sirviera comunicármela oficialmente para eximirme de toda responsabilidad. Mis razones fueron atendidas entonces y el ministro me contestó que el gobierno aprobaba mi determinación de no perder anticipadamente nuestros elementos, sino encomendarlos a la suerte de una batalla. El ejército francés esquivó ésta por entonces.

Seguí mi marcha sin interrupción, si bien perdiendo en el desierto una tercera o cuarta parte de nuestro ejército, centenares de acémilas y la mayor parte de nuestras municiones de guerra.

Di aviso al gobierno, que se hallaba en la villa del Álamo de Parras, que notaba síntomas de disolución en nuestras fuerzas, por causa de la escasez y a consecuencia de los sufrimientos físicos que había experimentado por ella.

Recibí una orden firmada por el señor ministro de Relaciones, en que se me prevenía no separarme del lado de nuestras tropas para evitar la primera.

En la hacienda de Santa Rosa citó el gobierno una junta de generales, oyó el parecer de éstos y me confirió, después de oír también la opinión de sus Ministros, el mando en jefe de nuestro ejército.

Se me dieron además facultades extraordinarias para proporcionarme recursos metálicos, de que carecía en lo absoluto el

ejército, pero con la restricción de obrar en este punto de acuerdo con el Gral. Patoni.

El Sr. Patoni es el gobernador constitucional de Durango y ha ilustrado su nombre por servicios prestados a su patria.

El gobierno y el ejército se hallaban entonces en el estado del que era gobernador aquel general.

Me dirigí al mismo, ordenándole oficialmente, que por vía de préstamo agenciara, con la mayor prontitud de las haciendas y rancherías inmediatas, algunos miles de pesos, para subvenir de pronto a las más imperiosas necesidades de nuestros soldados.

Patoni me contestó el mismo día, haciéndome presente la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden, por la miseria en que la guerra había dejado a los habitantes de aquellas comarcas.

Si esto era una verdad, no lo era menos que la situación en que yo y las tropas nos encontrábamos, era casi desesperada por la intencional imprevisión del gobierno.

En estas circunstancias era cuando se me encargaba el mando del ejército, para que su disolución, que era casi inevitable, tuviera lugar en mis manos.

El partidario más firme que tenía en el gabinete al tratarse del nombramiento de general en jefe, era precisamente don Sebastián Lerdo de Tejada. Este informe lo he recibido del ministro de la Guerra.

Hay que notar, que si era mala la condición de nuestro ejército al retirarse de Anhelo, había empeorado notablemente, como era natural, por las causas que he reseñado.

Hay también que notar, que al encargármese el mando en jefe, el gobierno contaba en sus arcas con algunos millares de pesos, para sus atenciones y las de sus empleados. Se prefería todo esto a la salvación de nuestro ejército, de ese ejército cuyos sufrimientos tocaban al heroísmo y que tantos esfuerzos costara a los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Tuve conocimiento de esto, así como muchos de nuestros generales, por el informe que en presencia del mismo gobierno dio el

ministro de la Guerra. El hecho es que ni un solo peso se ministró a nuestras tropas.

Quiero ser justo y verídico. Parte de esas mismas tropas se habían organizado a la sombra del gobierno en Nuevo León, si bien debido al empeño, para con el mismo gobierno, del Gral. Negrete y a su notoria actividad.

En la junta de generales que he citado, presenté mi opinión en estos términos, que oyó el gobierno perfectamente: que aunque opinaba en general porque no se destruyeran aisladamente los elementos con que contábamos, valiéndonos de la extensión de nuestro terreno para sólo combatir cuando fuera oportuno y con ventaja contra un enemigo poderoso, creía por entonces que era absolutamente indispensable librar, con cuanta prontitud fuera posible, una batalla, fuera cual fuese el punto en que se encontrara el enemigo, su número y los auxilios que pudiera recibir, porque de esta manera, si la fortuna nos era propicia, nos apoderaríamos de alguna ciudad o estado de importancia o, en caso contrario, sería destruido nuestro ejército, lo que era preferible a que se destruyera por la miseria con deshonra del gobierno y de nuestras armas.

Emprendí mi movimiento de Santa Rosa y me coloqué entre los estados de Durango y Zacatecas. Ambos estaban ocupados por el ejército invasor.

Pocos días después tuvo lugar la jornada de Majoma.

Los azares de la guerra nos hicieron perder uno de los puntos que ocupaba nuestra tropa y parte de nuestra artillería.

Volvió a recuperarse todo.

Volvió a perderse de nuevo.

La muerte de los bravos coroneles Fernández y Villagrana que mandaban batallones de Zacatecas, así como la muerte de otros jefes y oficiales de distintos cuerpos, pero muy especialmente las heridas que recibiera el Gral. don Eugenio Castro, a quien encargué en esos momentos una carga de caballería, introdujo algún desorden en nuestras fuerzas.

El desorden desapareció bien pronto, debido a nuestra oficialidad.



A la vista del enemigo y entre el fuego quedaron poco después compactos y arreglados nuestros cuerpos de guardia nacional.

Eran en esos momentos las últimas horas de la tarde.

Esto, el cansancio producido por el combate, la postración física que trae consigo la escasez de todo género, las penosas fatigas del desierto, todo, todo me hizo ver que nuestros nacionales nada más podían ya.

Dispuse su retirada; se efectuó en el mayor orden al frente y a la vista de las fuerzas francesas. Éstas no se atrevieron a dar un paso sobre nosotros. Quedaron sólo dueños de una parte de nuestra artillería y de los cadáveres de nuestros bravos y patriotas milicianos, que se hallaban regados sobre el campo.

No he tenido intención de narrar aquí pormenorizadamente las circunstancias de aquella jornada desgraciada. Cumplí este deber en el parte oficial que rendí al gobierno. Para mi objeto, que ha sido enlazar los sucesos, baste lo dicho.

Baste también decir por conclusión sobre esto:

Nuestras fuerzas caminaron en el mayor orden hasta la villa de San Miguel del Mezquital y en la noche del mismo día que tuvieron lugar los sucesos de Majoma se disolvieron. Ninguna orden fue posible a evitar este mal.

Cada cual creyó que había cumplido con su deber, cada cual creyó más conveniente hacer la guerra en fracciones y por su cuenta. La expectativa, por otra parte, eran la escasez y el desierto.

El Sr. Juárez se hallaba en la villa de Nazas esperando el resultado de mi expedición.

Más de un centenar de jefes y oficiales corrieron para aquella villa a pedir órdenes, instrucciones o facultades al gobierno para continuar la guerra bajo otros auspicios.

Aquél no esperó a persona alguna. Supo el descalabro de nuestras fuerzas y se retiró a Chihuahua, ciento cuarenta leguas distante del punto que ocupaba.

Los restos insignificantes de nuestro ejército de nacionales, los dejé a las órdenes de los Grales. Quezada y Carbajal, mientras el gobierno disponía lo conveniente.

Di el parte oficial de que he hecho mención y, al acusárseme el correspondiente recibo, se me ordenó que entregara las fuerzas que quedaban de nuestro ejército al Gral. Patoni. Así lo hice.

En la conferencia verbal que tuve con el gobierno le hice presente que se conservaba también una pequeña escolta de caballería que me acompañaba y que aun de ella podía disponer. Este era mi deber.

A los dos o tres días, recibí una orden oficial para que entregara la escolta. La orden quedó cumplida.

Tácitamente quedaba a disposición del gobierno con mi carácter de general, pero no conforme con esto, oficial y verbalmente, le hice presente que estaba a sus órdenes y que podía disponer de mi persona como lo estimara por conveniente.

Ya no mandaba, pues, ni ejército, ni división, ni brigada, ni compañía. Ya no tenía comisión alguna militar que desempeñar; ya no tenía ni aun escolta.

Agréguese a estos hechos otros de más importancia respecto de lo que dice el gobierno en uno de sus decretos: que "teniendo el carácter de general del ejército, he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la república" y lo que dice también "del delito oficial de abandono voluntario de la Corte de Justicia".

Parte de los hechos que voy a referir los han presenciado personas bien caracterizadas, algunos del estado de Chihuahua y los otros los sabe el mundo todo. Hay otros sancionados con la firma del gobierno. Si hago algunas observaciones, serán las que se desprendan naturalmente de los hechos.

Llegué al estado de Chihuahua, después de los sucesos de Majoma, en los últimos días del mes de septiembre de 1864. Permanecí en el mismo estado hasta fines de febrero de 1865 en que salí para el extranjero.

En todo este tiempo, Chihuahua ha sido la residencia del gobierno general.

Cerca de tres meses, del tiempo que he señalado arriba, viví en la misma ciudad, donde residía el gobierno.

En todo este tiempo no he recibido tropas que mandar para defender las banderas y causa de la República. No he recibido comisión grande o pequeña para su desempeño con carácter militar. No he recibido la más ligera indicación de que se utilizarían mis servicios y buena voluntad en pro de la patria; de que se deseaba, aunque fuera en las apariencias, ocuparme.

El gobierno deseaba verme sin tropas, sin la posibilidad de adquirir nueva influencia a la sombra de las armas. Deseaba verme sin un apoyo positivo; el que me daba la ley era entonces débil a los ojos del gobierno.

En esos días debía de bajar del poder por exigirlo así un precepto constitucional, o en esos días tenía que dar una interpretación a la ley para ensanchar un año más su periodo constitucional.

Llegó el 30 de noviembre de 1864, cuarto año de la elección del Sr. Juárez. Ese día le dirigí una comunicación a aquel alto funcionario, por conducto de don Sebastián Lerdo de Tejada con su carácter de ministro de Gobernación, preguntándole si me entregaba el poder supremo al día siguiente, por haber cesado su período legal; o en caso contrario, le dije, que diera a la ley constitucional la interpretación que juzgara por conveniente, para evitar la anarquía, robustecer el legal ejercicio de las funciones del Presidente de la República y dejar incólume nuestra ley fundamental, ley que ha sostenido el pueblo mexicano con su sangre durante el período de ocho años. En el concepto, agregué, que yo sería el primero en acatar aquella resolución.

Ésta se me dio el mismo día 30 de noviembre con la nota de haber sido acordada en junta de Ministros. Traía la firma del Sr. Lerdo de Tejada.

Se decía que el período constitucional del presidente Juárez no concluía ese año (1864), sino el 30 de noviembre de 1865, según lo prevenido en la constitución. Ahora se dice también que según la misma constitución continúa ejerciendo el poder supremo.

Insertaré aquí las mismas palabras que usó el ministro en su nota oficial, al sacar la consecuencia de las razones que dejaba asentadas.

En tal virtud, decía, la fecha del término del período del C. Presidente de la República, no es sino el 30 de noviembre del próximo año de 1865, conforme al evidente tenor literal del artículo 80 de la constitución.

En la misma comunicación se me declaraba presidente de la Corte.

Esa declaración ni la pretendía yo, ni la exigía la época; ni la necesitaba por mi parte, ni la reclamaban los intereses políticos de México.

Yo fui nombrado, por la nación, presidente constitucional de la Corte en 1862 y la Cámara lo declaró así de una manera solemne.

El decreto en que se hizo esta declaración, lo sancionó el Ejecutivo y se publicó en toda la República.

Ni la prensa o la opinión pública, ni los ayuntamientos o autoridades municipales, ni los gobernadores o legislaturas de los estados, pusieron en duda mi elección, o que hubiera dejado de ser el presidente de la Corte.

La nación tenía hecho el nombramiento de sus autoridades supremas conforme a su ley fundamental, único origen y fuente de autoridad entre nosotros. No necesitaba, pues, algún otro nombramiento o declaración.

Ésta sólo convenía a los proyectos posteriores de los Sres. Lerdo de Tejada y Juárez. Proyectos que tenían otras tendencias y no las de conservar inmaculada la ley, cuyo depósito encargara la nación a la lealtad del segundo.

Se quería que desapareciera el presidente constitucional de la Corte, el elegido del pueblo y sustituirlo con otro nombrado por don Benito Juárez, para destituirlo a su vez cuando así le conviniera.

Éstas han sido las tendencias del gobierno desde la ciudad de San Luis. Posteriormente no ha perdido oportunidad alguna para ponerlas en juego, aun cuando esa oportunidad no lleve el sello del patriotismo.

Así lo hizo a su llegada a los estados de Nuevo León y Coahuila, expidiendo un decreto para la reunión de los magistrados de que se compone la Corte. Me hallaba entonces mandando una división que operaba contra el ejército francés en el interior de la República.

No se miraba otro objeto en aquel decreto que el de nombrar un presidente de la Corte que debiera su creación y su nombramiento al Presidente de la República y que no tuviera el prestigio que da el pueblo con su voto al que elige para sustituir al magistrado supremo de la nación. El decreto no tuvo efecto alguno.

Por decoro del puesto que he ocupado y también por decoro y dignidad de la nación, única que tiene derecho para nombrar a sus autoridades supremas, darles poderes y retirárselos conforme a la ley, he conservado intacto el depósito que me encomendara el pueblo.

En mi correspondencia oficial, para con el mismo gobierno, seguí usando el título que recibí de mis conciudadanos de presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia.

La resolución dada por el gobierno de continuar un año más en el poder fue acatada por mí y así lo protesté anticipadamente, deseando sólo que se diera una inteligencia a la ley constitucional; que se le fijara un sentido determinado.

Ni entonces ni ahora he pretendido el poder por sólo el halago que puede ofrecerme en lo personal; en épocas más bonancibles y menos luctuosas, en que me ha sonreído la fortuna y el aura popular, pude haberlo obtenido por vías que no marca la ley; pero que a veces santifican en un jefe afortunado, las transiciones, las exigencias tempestuosas de una revolución; pero entonces y ahora mi único programa ha sido la voluntad del pueblo expresada en su ley fundamental.

Entonces y ahora sólo he deseado que el respeto a esa misma ley sea la base en que descansa la columna que sostenga nuestras instituciones y el que nos abra la ancha vía del progreso y del adelanto, como ha acontecido en la gran República en cuyas fronteras escribo estas líneas.

Entonces y ahora sólo he pretendido que la ley quede con toda su majestad, con todo el prestigio que le da siempre un pueblo culto, a fin de que no esté expuesta a ser juguete de malas pasiones.

Entonces y ahora he ambicionado mucho, mucho; pero por esto mismo no se han limitado mis aspiraciones a sólo el poder. Estas por desgracia han sido algo vulgares en nuestro país y yo he ambicionado algo más original, más noble y más elevado. He ambicionado de toda preferencia ver a mi patria con gloria, grande y feliz bajo los auspicios de la libertad, a la sombra de la ley, bajo la égida del verdadero gobierno del pueblo.

He ambicionado si se quiere el poder, pero por esos medios honrosos, legales y permitidos, que han dejado siempre tranquila mi conciencia y que no pueden avergonzarme ni ante mis conciudadanos, ni ante el mundo, ni ante la historia.

Regístrese mi vida pública y un solo hecho no desmentirá mis palabras.

Quien no ha llevado siempre otra bandera que la de la ley que le diera el pueblo, quien ha sacrificado a su amor propio y a sus ambiciones, a sus amigos y a sus partidarios en aras de la ley y del deber, quien con fortuna ha cooperado a crear una situación nueva en su país y colocado al frente de ella, pone esa situación a los pies del que llama la ley, quien ha combatido lealmente por ésta y no ha oído ni querido oír proposición alguna que esté colocada fuera de ella, tiene un derecho, además del deber que le impone su juramento, de exigir del infractor, llámese como se llamare, que vuelva a la ley sus prerrogativas y privilegios, si esas prerrogativas y privilegios han sido conculcados.

Permítaseme la precedente digresión.

Mi comunicación oficial y la contestación del gobierno de que me he ocupado, se publicaron en el *Periódico Oficial*.

En la ciudad de Chihuahua no había siquiera la posibilidad de establecer la Corte. Todos los magistrados se hallaban a inmensas distancias, a excepción del Sr. licenciado don Manuel Ruiz. No se me había encargado tampoco, como he dicho, comisión alguna militar. Para quitar aun el pretexto de que se dijera que trataba por mi parte de

desprestigiar al gobierno, mezclándome en las reuniones para dar el nombre de mi posición política como una bandera a los descontentos, que nunca faltan y más en las situaciones violentas y agitadas, me retiré voluntariamente de lo que llamamos buena sociedad. Me privé aun de esos momentos de inocente solaz, no obstante la benévola y cordial acogida que tuve en lo particular de los caballerosos habitantes de aquel demócrata e ilustre estado.

Mi permanencia, pues, en Chihuahua, además de ser sin objeto alguno de utilidad pública, me era altamente penosa y mortificante.

En atención sólo a lo primero, dirigí una carta al presidente C. Benito Juárez, el 28 de diciembre de 1864. Del contenido de aquella pieza no se ocuparon los decretos de 8 de noviembre.

En ella le decía que, habiendo terminado el negocio que me llevara a aquella ciudad —el de saber si había terminado o no su período legal—, me hallaba en ella sin objeto alguno desde principios de octubre de ese año, fecha en que por orden suya había entregado el mando de las fuerzas al Gral. Patoni; que no estaba instalada la Corte, ni había siquiera la posibilidad de instalarla; que, además, el estado a que habían llegado las cosas hacía posible una crisis y que, estando reunidos el Presidente de la República y el presidente de la Corte, no sería remoto que ambos cayeran en una celada con grave perjuicio de la nación, por no quedarle a ésta medios para establecer un gobierno legítimo; que por estas razones le pedía que me concediera una licencia como presidente de la Corte y mandara que se me extendiera un pasaporte como soldado para dirigirme al interior de la República, o a cualquiera de las poblaciones situadas en sus costas, aun atravesando por mares o territorios extranjeros, según yo mismo lo estimara por conveniente, a fin de continuar seguir sirviendo a mi patria.

Remití también oficialmente esta solicitud, sólo omitiendo en ella el contenido de lo que va de letra bastardilla<sup>6</sup> por no creer conveniente

---

<sup>6</sup> Hemos suprimido en esta reproducción, el señalamiento de los párrafos que González Ortega hizo en la edición de su protesta.

colocarlo en un documento oficial. Era no obstante una de las más fuertes razones en que apoyaba mi solicitud.

Mi carta y comunicación fueron leídas en junta de ministros y atendidas como era natural mis razones.

El día 29 me contestó el Sr. Juárez de absoluta conformidad, diciéndome: "Ya queda acordado que se le conceda a usted la licencia y pasaporte que solicita y oportunamente entregarán a usted los respectivos ministerios los documentos indicados".

El 30 recibí la licencia que se me concedía como presidente de la Corte por el ministerio de Justicia y el pasaporte, como soldado, por el ministerio de Guerra.

Inserto aquí íntegro este último documento, porque en los decretos y circular a que me he referido, intencionalmente se ha hecho omisión de si saqué o no pasaporte como soldado al salir del país, para decir, que "he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero, durante la guerra, sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la República":

Secretaría de Estado y del despacho de Guerra y Marina. —  
Sección 1ª—Con esta fecha me dice el ciudadano ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública lo que sigue: 'Con esta fecha digo al C. presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que copio:

«En vista de la solicitud de usted, relativa a que se le conceda licencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, para pasar a puntos no ocupados por el enemigo, a fin de continuar defendiendo con las armas la independencia de México, el C. presidente se ha servido acordar, en junta de ministros, que se conceda a usted licencia por tiempo indefinido, hasta que vuelva a presentarse en la residencia del gobierno, o hasta que el mismo gobierno llame a usted o le dé alguna comisión, pudiendo usted, entretanto, dirigirse, bien sea directamente, o bien atravesando de tránsito el mar o algún territorio extranjero, a puntos de de la



República Mexicana no ocupados por el enemigo, para continuar defendiendo la independencia nacional con las fuerzas que pueda usted levantar; bajo el concepto de que, en las operaciones militares que emprenda, obrará usted de acuerdo con el gobernador y comandante militar del estado respectivo, o con los demás jefes de fuerzas republicanas, para que, en combinación con las levantadas por usted, hostilicen a las contrarias, dejando siempre expedita la acción de las autoridades que ejerzan mando político o militar, con nombramiento del gobierno supremo, o de sus delegados competentemente facultados para expedirlo».

«Dígoles a usted de orden suprema, en contestación a su oficio relativo de 28 del que acaba.»

Y tengo el honor de comunicarlo a usted para los fines correspondientes.

Y lo traslado a usted por lo relativo al ramo de Guerra.

Independencia y Libertad, Chihuahua, diciembre 30 de 1864. —M. Negrete. —C. general de división, Jesús G. Ortega. —Presente.

Del tenor literal del documento inserto se deduce:

1º Que he tenido licencia como presidente de la Corte y pasaporte como soldado para salir del país y atravesar por territorio extranjero. Ya se verán las causas que motivaron mi permanencia fuera del país.

2º Que no he llevado orden determinada para organizar esta o aquella fuerza, para crear estos o aquellos elementos en tal o cual fecha, para salir en tiempo señalado a esta o aquella parte del territorio nacional después de mi travesía por territorio o mar extranjero; sino que sólo se me ha dicho, que en defensa de la independencia haga lo que pueda, en territorio nacional no ocupado por el enemigo, pudiendo dirigirme por el punto que estime por conveniente.

3° Que la licencia que se me diera acordada en junta de ministros fue por tiempo indefinido, hasta que yo volviera a presentarme en la residencia del gobierno, o hasta que el mismo gobierno me llamara o me diera alguna comisión, manifestando con esto que ni como presidente de la Corte, ni como general me necesitaba por entonces y que con uno y otro carácter era conveniente que estuviera lejos de la residencia del gobierno, hasta nueva orden.

4° Que el gobierno en vez de darme una autorización para organizar fuerzas en tal o cual parte; facultades para proporcionarme recursos en tales o cuales puntos, lo que se ha hecho con centenares de personas, facultando a algunas de ellas para que a su vez autoricen a otras y lo que se ha hecho aun con simples guerrilleros destituidos algunos hasta de moralidad; en vez de extenderme, aunque fuera un simple pasaporte para caminar como lo pretendía, se me dijo y previno que, con las fuerzas que levantara, obrara en combinación con los gobernadores, comandantes militares y con los demás jefes de fuerzas republicanas, dejando siempre expedita la acción de las autoridades que ejerciesen mando político o militar con nombramiento del gobierno supremo, o de sus delegados. Esto es, que el gobierno me prevenía que no hiciera cosa alguna en defensa de la nación; porque perdido como temamos al estado de Zacatecas, ¿qué fuerzas iba a levantar? ¿En qué puntos podía hacerlo? ¿De qué recursos iba a disponer? ¿Con qué facultades podía proporcionármelos? Un gobernador o comandante militar, perdida la capital de su estado, sin recursos y con necesidad de proporcionárselos para hacer frente a una situación extraordinaria, ¿podría facilitármelos o concederme la facultad de agenciarlos, cuando esa facultad me la negaba el gobierno de la unión? ¿Podría hacer esto un delegado del gobierno o un agente de ese mismo delegado, cuando su círculo de acción debería ser más reducido y limitado? ¿Podría ponerse a mis órdenes un simple capitán de guerrilla, a fin de que, sirviendo de centro su fuerza, pudiera yo levantar, moralizar y disciplinar mayor número de soldados, cuando el gobierno le prevenía en mi pasaporte que sólo obrará en combinación conmigo?

Queda, pues, demostrado, por ahora con hechos, que tenía licencia y pasaporte para salir y atravesar de tránsito por el extranjero. Queda también demostrado que tenía por la nación el título de presidente de la Corte, cuyo cargo ni aun podía ejercer entonces en la esfera judicial, por la imposibilidad de que se reuniera aquel cuerpo y que conservaba sólo el nombramiento para sustituir al Presidente de la República, conforme a las prevenciones de la ley. Queda por último demostrado que me hallaba sin comisión alguna militar, sin ejército, sin fuerzas aunque fueran en pequeño número, sin elementos para hacer la guerra y con todas las trabas y estorbos oficiales puestos por el gobierno.

No me desalenté por aquella disposición del Ejecutivo. No me era extraña; la esperaba ya. Mis servicios a la patria me darían influencia en ella y mi influencia se oponía a otros engrandecimientos personales.

Recordaba hechos recientes, hechos en que se me había presentado toda clase de dificultades y en que, sobreponiéndome a ellas, le había ofrecido de nuevo mi espada y mi persona al hermoso México, a mi desgraciada patria. ¿Qué importaba una dificultad más?

En vista de las noticias que tenía del interior y de la resolución del gobierno, determiné colocarme a una gran distancia de éste.

Desconfiaba de mí mismo. Desconfiaba hacer lo que fuera más conveniente a México. Deseaba el acierto y buscaba la luz.

Me aconsejé de dos ciudadanos que por su ilustración y notorio patriotismo daban toda clase de garantías. Esos dos ciudadanos formaban una parte del círculo del gobierno del Sr. Juárez, eran de sus más celosos partidarios y le servían de apoyo y sostén; los suponía, como era natural, con la ciencia de los hechos y al corriente de las exigencias de la época; estaban además revestidos de un carácter público como diputados al Congreso general; eran los Sres. don Guillermo Prieto y don Francisco Urquidí.

Ambos opinaron porque tomara la vía de los Estados Unidos, tanto porque era la única que quedaba para dirigirme por el atlántico, atravesar el continente por Panamá y entrar por Acapulco a los estados del sur de la República, como para hacer algo o examinar lo que pudiera hacerse en la gran República americana, en favor de México.

Acepté este consejo y emprendí mi marcha. Es de advertir que nada de lo relativo a mi viaje ignoraba el gobierno y que al llegar a El Paso del Norte me encontré con una orden que diera el mismo gobierno al administrador de aquella aduana, para que se permitiera el paso de mi equipaje para los Estados Unidos. Esta orden había sido solicitada por mis amigos.

Pasaba por la ciudad de Santa Fe, capital del territorio de Nuevo México. Las supremas autoridades de aquel territorio me manifestaron que se encontraba en la misma ciudad un extranjero de origen húngaro y que se decía comisionado especial por el gobierno de México para enganchar voluntarios, agenciar un empréstito de algunos millones e hipotecar los productos de las aduanas marítimas del pacífico. Me dijeron también que había exhibido los documentos que acreditaban su comisión, pero que entendían que aquellas piezas eran apócrifas o supuestas, porque la falta de representación de aquel individuo, la circunstancia de ser desconocido su nombre y su persona de todos los mexicanos residentes en aquella ciudad y su carácter de extranjero en México, les hacía creer que no podía habersele encargado una comisión de tal importancia, una comisión que las naciones no encomiendan, según las prácticas establecidas, sino a sus propios hijos; que por tales circunstancias me pedían sobre esto algunos informes, para que en el supuesto que aquel personaje fuera un impostor, aprehenderlo y remitirlo a las autoridades mexicanas.

Yo no tenía más antecedentes de aquel extranjero apellidado Jaymes, que los de haberseme presentado una vez con una carta de introducción y con el carácter de coronel, solicitando un empleo militar en las fuerzas de mi mando, empleo que no le concedí por falta de informes. Los que adquirí después, fueron que aquel personaje era uno de tantos que viajan por el mundo, en pos de gloria, de fortuna y de aventuras. Volví a verlo tres o cuatro veces.

Me impuse después de los documentos que acreditaban su comisión. Estaban en toda forma firmados por don Sebastián Lerdo de Tejada. Se le autorizaba para que enganchara una fuerza hasta de 2,000 hombres en el extranjero, para que agenciara una suma de algunos

millones y pudiera subvenir a las atenciones de aquélla y en fin, para que hipotecara, como garantía de esta suma, los productos de algunas de las aduanas marítimas del pacífico.

Siendo bien notorios los talentos del Sr. Lerdo de Tejada, es de suponerse que sólo quiso cubrir las apariencias, autorizando a un extranjero para que hiciera tal o cual cosa, con el convencimiento pleno que nada haría.

Dije a las autoridades de Santa Fe, la clase de comisión legal que llevaba el personaje húngaro y les di las gracias por su celo en favor de México.

Mi llegada al centro de los Estados Unidos tenía lugar en los momentos mismos en que concluía la guerra de esta gran nación. La prensa toda se ocupó de mi llegada, como una muestra de profunda simpatía de este país para el pueblo mexicano. Otro tanto hizo la prensa del continente y no menos la prensa europea.

En los Estados Unidos se creyó que traía alguna comisión de mi gobierno y se creyó también que eran los momentos más oportunos, como efectivamente lo eran, de realizar cualquiera proyecto en favor de México, en pro de su independencia. El entusiasmo de los americanos por nuestra causa y por su doctrina de Monroe, no tenía límite entonces.

A mi tránsito de Nuevo México a Nueva York, se me presentaron millares de personas, entre ellas muchas de una elevada posición social y política, ofreciéndome su persona y su influencia en favor de México. Generales con una nota honrosa en sus servicios y que mandaban brigadas, cuyas fuerzas habían concluido el tiempo de su enganche, se ponían a mis órdenes para servir a nuestra causa.

Fácil habría sido pasar el río del Norte, por la posición en que se hallaban, sin haber barrenado el carácter neutral que conservaba el gobierno de Washington en la cuestión franco-mexicana. Hablaron conmigo algunos banqueros de la mejor nota y vi la posibilidad de agenciar una fuerte suma para subvenir por nuestra parte a las atenciones de la guerra. Personas hubo que diciéndose autorizadas por mí, sin estarlo, engancharon en unos cuantos días en Nueva York millares de hombres para ir a México; si bien esto, como he dicho, no era con mi

aprobación ni estaba en mis proyectos, porque no quería llevar a mi país una expedición filibustera.

Sin pérdida de tiempo dirigí una carta con fecha 8 de mayo a don Benito Juárez, manifestándole mi llegada a los Estados Unidos, la manera con que había sido recibido en ellos y lo que podía hacerse en favor de México. De todo esto estaba impuesto el Sr. Juárez por los periódicos.

Le decía, también, que me comprometía a organizar o enganchar, por mi parte, el número de voluntarios que quisiera, a reunir los elementos de guerra que me indicara y a agenciar la fuerte suma de pesos que creyera por conveniente, para hacer la guerra en una escala más elevada y que nos diera más felices resultados; y que para todo esto sólo necesitaba una autorización, porque ni había querido ni quería celebrar contrata, contraerme compromiso, o dar paso alguno que fuera sin la autorización de la persona que por la ley tenía los poderes de la nación. Le ofrecía de nuevo mis servicios a favor de México. No olvidé decirle, que caso de que no me mandara la autorización correspondiente, se sirviera contestarme avisándomelo, para normar a esto mis ulteriores disposiciones.

Traté este negocio en carta particular y no en una nota oficial, porque acerca del mismo no tenía carácter oficial alguno y además porque de una u otra manera daba el mismo resultado, importando poco o nada la forma.

Nombré una comisión para que entregara mi carta al Sr. Juárez, después de haberse impuesto de su contenido. Formaba aquélla don Guillermo Prieto, administrador general de correos y diputado al Congreso de la Unión.

Recuérdese que salí en fines de febrero del estado de Chihuahua. Nótese que mi viaje por los desiertos de Nuevo México, lo hice en más de dos meses, por haber tenido que emprenderlo en el invierno. Téngase conocimiento también que para recibirse la contestación de una carta, dirigida de la ciudad de Nueva York a la de Chihuahua, son necesarios de dos meses veinte días a tres meses y esto siempre que no ocurra algún

incidente extraordinario en el correo y que sea durante la estación del verano, en que caminan con más rapidez los coches de la posta.

En vista de esto, recibí la contestación de don Guillermo Prieto hasta principios de agosto último. En ella decía que había cumplido mi comisión; que el Sr. Juárez había recibido mi carta y oído con atención e interés las observaciones que sobre su contenido le hiciera el mismo Sr. Prieto; que entendía por lo mismo que en el correo próximo se me remitiría la autorización que solicitaba.

La conclusión de su carta era una felicitación que me dirigía, propia de sus patrióticos sentimientos. Me decía que el gobierno aceptaría o no mis servicios, los utilizaría o no en bien de la patria, pero que por mi parte dejaba cumplido el más noble y elevado deber de un mexicano, haciendo a un lado todo lo que tenía un carácter personal, para robustecer la acción del gobierno, para no levantar una nueva entidad, sino hacer que México luchara como un solo hombre por la causa del derecho, dirigido por una sola inteligencia, que era su gobierno legítimo.

En el correo inmediato, a fines de agosto, recibí otra carta del Sr. Prieto y en ella me decía que, no obstante lo que me manifestara en su anterior, parecía que el gobierno no se había resuelto a darme la autorización, pero que de una u otra manera me contestaría el Sr. Juárez.

Esperé inútilmente el próximo correo y el siguiente. Estábamos en septiembre. Ningún extravío habían sufrido las correspondencias anteriores. Pregunté al ministro de México cerca del gobierno de los Estados Unidos, licenciado don Matías Romero, si por su conducto se me había remitido algún pliego procedente del gobierno de la República Mexicana y me contestó negativamente.

Entendí por todo esto que el Sr. Juárez ni me había contestado ni me contestaría. Creyó que de su respuesta haría yo el uso conveniente y que desmentiría con ella los fundamentos de los decretos de 8 de noviembre, que ya desde aquella época deben haber estado preparados en la papelería del ministro. A mi vez entendí, por entonces, que sólo se trataba de detenerme en los Estados Unidos, poniendo en juego intrigas de mala ley, para que no pudiera regresar a México antes del día primero de diciembre.

Creo hasta inútil la explicación de mi conducta a mis conciudadanos por los cargos que contra mí formula el gobierno; sus decretos, vistos por el vehículo imparcial de la razón y la filosofía, me eximen de ese trabajo. En esos decretos donde se dice ilegalmente que ha lugar a proceder contra mí, donde se agrega, faltando a la verdad, que abandoné voluntariamente el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia y que teniendo el carácter de general del ejército, he ido a permanecer voluntariamente en el extranjero durante la guerra, sin licencia del gobierno y con abandono del ejército, de sus banderas y de la causa de la República, en esos mismos decretos, repito, se declara presidente don Benito Juárez y declara que ni al presidente constitucional de la Corte ni al presidente que él nombre, entregará el mando. He aquí el único objeto que se ve en esos decretos.

Si se trataba, como han tratado los Sres. Lerdo y Juárez, de pisotear un principio republicano, de destruir nuestro orden constitucional, de faltar al compromiso que con juramento se contrajeron para con los pueblos, más franco habría sido dar un golpe de estado como el de Comonfort, alegándose como siempre se alega, la salvación de México; porque el escándalo es el mismo; la falta de lealtad al pueblo la misma; los resultados los mismos. La diferencia es una sola; que en el golpe de estado de Comonfort hubo a lo menos franqueza y valor civil, y en el de 8 de noviembre, faltó todo esto y se sustituyó con palabras y sofismas; palabras y sofismas que no sirven sino para insultar a las naciones, no para engañarlas.

Que abandoné las banderas del ejército y la causa de la República, dicen los Sres. Lerdo y Juárez, esto es, que falté a mi deber. Dicen esto en el documento mismo en que ellos faltan al suyo, al más grande y solemne que puede tener un hombre. Para atenuar su falta necesitaban mancomunarse con otra persona y con otra persona, que por un precepto de la ley, debía encargarse del poder supremo.

Que abandoné las banderas del ejército y la causa de la República. Quien sale del pueblo y de simple ciudadano ocupa por voluntad de ese mismo pueblo y sin una sola intriga, una posición política en su país no es porque sepa abandonar la causa del honor y del deber. Quien de



simple ciudadano y sin ser su profesión la de soldado, abandona voluntariamente los salones, las dulzuras del hogar doméstico y los halagos que ofrecen el poder y los palacios para combatir constantemente y sin tregua por la libertad, por los derechos del pueblo y por el orden legal, no es el que abandona la causa del honor y del deber.

Quien deja el bastón de gobernador constitucional de un estado, quien deja también el alto puesto en que lo colocara la voluntad de sus conciudadanos como presidente de uno de los poderes supremos de los Estados Unidos Mexicanos, para ir a combatir contra los invasores de su patria, para ir a defender los muros de una ciudad donde cayó prisionero sosteniendo su bandera, no es el que abandona la causa del honor y del deber.

Quien prisionero burla a sus carceleros y libre, por medios lícitos y honrosos, vuelve a ofrecer a su patria su espada y cuanto vale y, luchando con las intrigas y las dificultades, levanta fuerzas y sigue combatiendo contra los invasores de México; quien hace esto, no es quien voluntariamente abandona al ejército, a sus banderas y a la causa de la república.

Quien sabe lo que es honor y a quien ni su conciencia ni su país le han dicho alguna vez que haya faltado a su deber, no es quien abandona al ejército, a sus banderas y a la causa de la República.

¿Quién puede cometer esta falta?, me he preguntado a mí mismo, en las horas más serenas y tranquilas de mi espíritu. He encontrado esta única respuesta: quien está destituido no sólo de patriotismo y de ambiciones nobles, sino aun de amor propio y de dignidad personal. Hasta hoy ni mi conciencia ni mis conciudadanos me han colocado, gracias al cielo, en ese asqueroso banquillo. Estaba reservado a la ambición, para cubrir sus formas, revestirme con este ropaje. Estaba reservado al poder, echar mano de la calumnia para cohonestar su falta, al romper la constitución y rasgar su juramento.

¿Cómo decir que abandoné la presidencia de la Corte, que supone una fuga, cuando he salido del país con licencia y pasaporte del gobierno? Si llevaba, pues, esa licencia y ese pasaporte y ninguna orden determinada que cumplir y por lo mismo ninguna orden determinada a

qué faltar, ¿no sería un crimen dejar de decirle al gobierno, en la posición en que yo me hallaba, aquí puede hacerse mucho, mucho para la salvación del país en que yo y tú nacimos? ¿No sería un crimen dejar de repetirle: mi persona está a tus órdenes, utiliza mis servicios en bien de la patria, o de que menos contéstame para normar a tus letras mi conducta?

Si por mi parte cumplía este deber como buen mexicano; si llenaba otro que me imponían las circunstancias del país en que me hallaba, sin faltar a orden alguna del gobierno y dejando por lo mismo honrosamente satisfechos mis compromisos; si el gobierno recibió mi carta; si pudo y debió haberme contestado diciéndome, que no necesitaba mis servicios y que volviera al país por tal o cual vía, ¿no es faltar en el fondo y en la forma a la verdad, al decirle a la nación que no sólo he estado permaneciendo fuera de la república sino que ni antes ni ahora me he dirigido al gobierno, para manifestarle cuándo pensaba regresar al territorio mexicano? ¿No es esto calumniar? ¿Se acomoda tal proceder a la majestad de un gobierno? ¿Tan débiles chicanas, cuyos misterios están a la vista de los más legos en política, satisfacen acaso a un pueblo que ha visto hecha pedazos su ley fundamental? ¿Habrá algún cándido que no vea en la circular y decretos expedidos por el gobierno, en que sin facultades me exige la responsabilidad, nombra otro presidente de la Corte y declara que ni a mi ni a él entrega el poder supremo, aunque esté así prevenido por la constitución; habrá, repito, quien no vea en esos documentos otra mira, otro objeto, que el de perpetuar en sus manos el poder? Si era necesaria mi persona y así lo entendían los Sres. Lerdo y Juárez para cubrir una acefalía del gobierno, como ahora lo dicen, ¿para qué conceder entonces una licencia por tiempo indefinido, cuando ni en esta forma la pretendía para atravesar por mares y territorios extranjeros?

Si la necesidad era nacida de causas que no se conocían al otorgarme la licencia, ¿por qué no llamarme entonces? Con hechos francos y verídicos es con lo que un gobierno leal le habla a un pueblo que lo ha elegido y nombrado el custodio de su voluntad y de su ley.

Si se ha pretendido hacer por la independencia de México cuanto humanamente fuese posible dentro y fuera del país; si a esta causa se han subalternado todos los demás intereses, ¿por qué entonces no se me dio la

autorización que solicitaba para trabajar en el extranjero y tal vez con provecho, a favor de México? Porque esto era darme un medio de adquirir influencia y esto no convenía a otros intereses, mal encubiertos por cierto.

¿A qué otra causa puedo atribuir esto? ¿A la de que el gobierno me necesitaba cerca de sí para cubrir una acefalía que ocurriera, o para desempeñar funciones judiciales de la Corte? Se ha visto que ni la Corte estaba reunida, ni era posible que se reuniese y se ha visto también que se me dio una licencia y pasaporte para que pudiera retirarme del punto en que se hallaba el gobierno, atravesando territorios y mares extranjeros, sin la obligación de volver a su residencia sino cuando él me llamara, o yo quisiese volver. ¿A la de que el gobierno me necesitaba para encargarme alguna otra comisión de utilidad nacional? Se ha visto que ni me la encargó en Chihuahua, ni al retirarme de Chihuahua, ni al hallarme después fuera de aquella ciudad. ¿A la de que no había recibido mi carta? Se ha demostrado que la recibió y esto no sólo lo testifica el dicho autorizado del Sr. Prieto, sino el de muchas personas caracterizadas de Chihuahua. ¿A la de que me faltaba aptitud, representación y confianza nacional? Puede haber, o de hecho hay lo primero y lo confieso ingenuamente y sin modestia; pero esto no se ha tenido presente cuando los estados, los gobiernos y la nación me han honrado con la segunda y con la última. No creo que falte representación ni confianza pública a quien ha sido electo diputado a los Congresos constituyentes de Zacatecas y de la unión; a quien, como ministro, ha desempeñado la cartera de Guerra; a quien ha sido electo, por el sufragio popular, gobernador de uno de los primeros estados de la república; a quien se le han dado facultades amplísimas y el mando militar de los estados de San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Zacatecas por el general don Santos Degollado; a quien poco después se le ha nombrado, por el gobierno de la unión, general en jefe del ejército federal de la República y dándole en toda ella amplísimas facultades en los ramos de Hacienda y Guerra, a lo que se debió el triunfo definitivo de la reforma y del orden legal; a quien ha recibido en la presente lucha el mando militar de los estados de San Luis, Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas con

facultades extraordinarias en Hacienda y Guerra en los tres últimos y en todos los ramos de la administración en el primero para que lo gobernara; a quien se ha confiado poco después el mando en jefe del ejército de oriente y revestíendolo de omnímodas facultades para gobernar los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala; a quien la nación ha honrado con su voto para presidente de la Corte Suprema de Justicia; y a quien ha colocado el pueblo entre sus candidatos para Presidente de la República, no creo que le falte representación o la confianza nacional y más si se atiende a que no le faltaba a un extranjero, que no tenía en el país posición alguna, ni bienes, ni familia y a quien por lo mismo no mucho debía importarle la suerte de México.

Era el mes de septiembre, preparaba mi vuelta a México. Una orden judicial me imponía entonces arraigo en Nueva York. De esto se ocuparon también los periódicos de aquella ciudad.

Creí que esta orden sería revocada poco después por lo injusto del reclamo que la motivara, aunque fue dictada conforme a la legislación de este país. Me equivoqué de pronto; el negocio se demoraba, sin más razón en el fondo que la de demorarse. La mano de la intriga ponía en juego todos sus resortes y entiendo que la de la traición hacía a su vez otro tanto. Todo esto al fin se estrelló ante la integridad de jueces y magistrados probos. El negocio quedó concluido el 8 del pasado noviembre. La orden fue revocada.

Las últimas cartas que se habían recibido de El Paso del Norte en Nueva York, decían que el gobierno saldría para la población fronteriza de Piedras Negras. Me dirigí entonces a este punto y al tocarlo tuve noticia que el Sr. Juárez había retrocedido y ocupado a Chihuahua, por haber evacuado aquella ciudad las tropas francesas.

Tuve también noticia, aunque vaga, de los decretos y circular de 8 de noviembre.

Dirigí una carta fechada en Piedras Negras a don Andrés S. Viesca, invitándolo para una conferencia y lo esperé de este lado del Río, en el Paso del Águila.

El Sr. Viesca es un hombre de maneras finas, decentes y caballerosas y creo inútil decir que está nombrado gobernador y

comandante militar del estado de Coahuila por don Benito Juárez, en uso de las facultades de que se halla investido.

El Sr. Viesca se prestó a la conferencia y en ella le manifesté, después de imponerme de la circular y decretos mencionados, que deseaba saber, con el carácter oficial que tenía y que me diera la nación, bajo qué aspecto veía la circular y decretos de 8 de noviembre; que por mi parte no venía a trastornar el orden público y que para ello viajaba de incógnito y solo, rehusando fuerzas que para apoyarme me habían ofrecido mis amigos y aun rehusando también hacer uso de órdenes y recomendaciones de autoridades y personas distinguidas de los Estados Unidos, para disponer de fuerzas en seguridad de mi persona en el territorio americano; porque quería que México diera este espectáculo, como un testimonio de sus adelantos políticos en el sistema republicano, presentarme sin más fuerzas, sin más apoyo, sin más títulos que los que me daba la ley y que el gobierno del Sr. Juárez entregara el mando supremo, sin atender a otras razones que a los preceptos fríos e imponentes de esa misma ley.

Es necesario decir, en honor de México y sólo en honor de México, que este espectáculo lo hemos presenciado ya, al llamar un ejército vencedor, con todo el poder de la victoria, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Benito Juárez, para colocarlo en la silla presidencial, quien no tenía otros títulos para esto que los que le daba la ley, únicos que da una República a sus ciudadanos.

El Sr. Viesca me contestó que no podía entrar conmigo en conferencia alguna oficial; que tampoco quería tocar la cuestión de legalidad y que sólo podía decirme que había recibido también una orden, decreto o circular, para aprehenderme y como dicha orden había sido expedida por el gobierno de don Benito Juárez en tiempo hábil, esto es, en el mes de noviembre, estaba dispuesto a cumplirla, estaba dispuesto a aprehenderme. Su secretario agregó que no sólo a aprehenderme, sino aun a fusilarme.

Repliqué al Sr. Viesca, que era necesario terminar prudentemente y de una manera decorosa y digna, una cuestión que tanto afectaba los intereses de México, que era necesario que me permitiera pasar por el

estado que mandaba, para dirigirme a Chihuahua, a fin de verme con don Benito Juárez y hacerle presente, en lo verbal, los males que iba a causar a la nación con el paso que acababa de dar, para que si era posible se enmendara el error. Le dije, por último, que si creía comprometer su responsabilidad haciéndome aquella concesión, pasaría el Río y una vez hallándome en el estado de Coahuila y no en territorio extranjero, podría mandarme aprehender, disponer de mi persona, o remitirme preso a Chihuahua, porque quería demostrarle a la nación que comprendía mi deber y sabía cumplirlo.

El Sr. Viesca rehusó aceptar mis proposiciones, indicándome sólo que podía dirigirme a Chihuahua por los desiertos de Texas.

Efectivamente se expidió una orden, decreto o circular, por el gobierno, cuya forma no recuerdo aunque sí su contenido, para que fueran aprehendidos todos los que hubieran salido al extranjero sin comisión u orden especial del gobierno y todos los que hubieran salido con licencia del mismo gobierno, para atravesar por mares o territorios extranjeros. Esta orden, decreto o circular, no tenía más objeto que mi persona y, aunque injusta, la legaliza hasta cierto punto la conveniencia de un gobierno de hecho; no así si ella fuera general. Multitud de jefes y oficiales han sido abandonados por el gobierno en Chihuahua después de dilatados servicios y sin recursos, pero con el corazón lleno de fe, al avanzar el ejército francés sobre aquella ciudad, la han abandonado, tomado el desierto y atravesado una parte de territorio extranjero, para entrar por otras vías a su patria y seguir combatiendo por su independencia. Otros han sufrido un descalabro en las fronteras de México, después de haber peleado como bravos y han tenido que salir involuntariamente al extranjero, unos a curarse de sus heridas y otros a prepararse para seguir luchando por su patria.

Con pleno y absoluto conocimiento del gobierno han salido para el extranjero muchos de los hombres más influyentes del país. Con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Plácido Vega y aun creo que con comisión; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Pedro Ogazón; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Manuel Doblado; con

pleno y absoluto conocimiento del gobierno salió el general don Felipe B. Berriozábal, exigiendo hasta que se le firmara un pasaporte para retirarse al extranjero, supuesto que no se necesitaban sus servicios; con pleno y absoluto conocimiento del gobierno han salido otras personas de la misma o menos influencia militar, unas con pasaportes y otras arrojadas e impelidas por el gobierno. A un general, luego que ha perdido la fuerza que por sí ha levantado y más si hace alguna sombra al gobierno, no se le dice expresamente que vaya a engrosar las filas de la traición, ni que salga tampoco al extranjero, pero se le obliga a hacerlo por otros medios más eficaces. En vez de darles, no fuerzas, porque no las tiene el gobierno, sino los medios de levantarlas y organizarlas, se les relega a hacer un papel humillante e indigno, a que concurren todos los días al palacio, a que anden siguiendo al gobierno de ciudad en ciudad. Esto ha dado el resultado que hombres débiles, a quienes dominan sus pasiones, hayan ido a aumentar el catálogo de la traición, ya como políticos y ya como militares y que otros más esforzados, más convencidos de su propia dignidad y de lo que corresponde al honor del suelo en que se nace, hayan salido al extranjero, protestando con esto ante la gente pensadora y ante el mundo, contra los invasores de su patria y contra el gobierno, único responsable de todo lo que no se haga pudiendo hacerse.

Yo mismo he hablado al Sr. Juárez sobre la mala impresión que causaba la salida al extranjero de personas influyentes y que convendría que se impidiera esto de una manera expresa y terminante. Salían entonces de Monterrey el Gral. Doblado y el coronel Rincón Gallardo, ambos gobernadores que habían sido del estado de Guanajuato. La medida no llegó a dictarse, ni quiso dictarse, sino cuando tenía por objeto a mi persona.

He puesto la mano sobre mi corazón al escribir este manifiesto y me he preguntado una y muchas veces: ¿a los intereses de México, del suelo que meció mi cuna, que deposita las cenizas de mis padres, que conserva los objetos que me son más queridos y que abraza mi pasado y mi porvenir, son convenientes los términos en que va redactado? Mi conciencia ha respondido afirmativamente.

Yo he defendido al gobierno del Sr. Juárez, con la lealtad de un caballero, con mi espada y con mi voz durante seis o siete años; yo le he honrado con mi firma, dentro y fuera de mi país, mientras ha llevado lealmente la bandera de la ley que le encomendara el pueblo; pero yo ni honro, ni he honrado a quien burla a sus conciudadanos, a quien falta a sus compromisos y a sus juramentos, a quien traiciona la ley, llámese Comonfort, o llámese Juárez. Yo ni honro, ni he honrado a quien deshonra a mi país; a quien con un hecho oficial le grita al mundo que México no tiene leyes, porque ellas sólo sirven para romperse cuando así conviene a la voluntad de un mandarín; aun cuando esto se haga al mismo tiempo que México demuestra al mundo con su sangre, que no rasga la ley que le sirve de bandera, aunque tenga que pasar por un mar de sangre y de destrucción.

Yo he sido uno de los caudillos del pueblo; yo he arrastrado a millares de hombres a la pelea en defensa del principio de la legalidad, aun con una de las naciones más poderosas de la tierra; yo he presenciado más de una vez correr la sangre de mis conciudadanos; yo he visto destruidas nuestras sementeras e incendiadas nuestras poblaciones y ciudades en defensa de ese principio. Yo, pues, tengo un doble deber de conciencia, de hacer que no sean inútiles tantos esfuerzos y tantos sacrificios.

No he amontonado cargos sobre el gobierno, inútiles e innecesarios, dictados por un sentimiento innoble. El público tenía que juzgarme; el público tenía que ver mis letras ahora y cuando ya hayan dejado de rugir las pasiones, de hablar los intereses y no me sería muy propicio. He defendido el orden legal, porque este era mi deber. Si otro falta al suyo, esto no me exime ni puede eximirme de llenar el mío. He defendido mi persona, no simplemente como mi persona, sino cuando ella ha importado, por voluntad de la ley, la salvación de un principio. He reseñado, a muy grandes trazos, errores cometidos por el gobierno y motivados por intereses particulares; pero esto no lo he hecho sino cuando ese mismo gobierno ha autorizado lo que digo, con un acto oficial, cuando ha roto todos sus títulos y cuando ya no es el gobierno que creara la ley, sino el que la destruye para conservarse sobre ella. En



este punto protesto que sólo he deseado que aproveche la nación los errores de sus gobiernos pasados y los errores de sus gobiernos presentes, para dar por concluido su bien pronto, aunque doloroso aprendizaje como nación soberana.

Tampoco he querido amenguar las glorias de mi patria. Demasiadas glorias tiene una nación que luchando con un enemigo poderoso, que cuenta con todos los medios posibles para atacarla y dividir a sus hijos, se conserva aún sobre la arena y en la lucha, después de un combate de cuatro años. Demasiadas glorias tiene una nación que ni uno solo de sus estados, que ni uno solo de sus pueblos se ha unido a la intervención, teniendo sólo que ceder al ser ocupados por bayonetas extranjeras. Demasiadas glorias tiene una nación que conserva su gobierno, que lo recibe en sus ciudades, que le abre sus arcas y le ofrece sus respetos, cuando se presenta, no ya con el poder de los cañones, sino con el que le da la ley que lleva en la mano. Demasiadas glorias tiene una nación que perdidos sus ejércitos, sin dinero, sin armas y sin municiones de guerra, improvisa en todo su territorio fuerzas más o menos numerosas para defender su independencia y que, destruidas éstas, improvisa otras nuevas colocando a su frente hombres ya conocidos en la escena, o héroes salidos de la nada, brotados del patriotismo de los pueblos. Demasiadas glorias tiene una nación que diariamente está honrando con las cabezas de sus hijos los cadalsos de México.

No soy tampoco quien ha amenguado las glorias del Sr. Juárez. Él es quien las ha destruido, él es quien ha roto sus títulos, él es quien ha pisoteado sus antecedentes. Sus glorias no han sido las de un gobierno que se pone al frente de sus legiones para enseñar a sus conciudadanos, con su propio ejemplo, a defender la independencia de la patria, o a morir por ella si es necesario. No las del diplomático que aúna, que mancomuna la causa de una nación con la causa de todo un continente y más cuando la causa de esa nación es la causa del continente. No tampoco las del acierto en la elección de las personas y por esto vemos en el extranjero, sin que se hayan utilizado sus servicios, generales que han peleado por la República con lealtad y con honor, personas que han desempeñado con acierto las carteras del despacho, gobernadores que han

administrado con acierto en nombre del pueblo y que han sido sustituidos por otros; y vemos por otra parte gobernadores, ministros y generales, nombrados por don Benito Juárez, levantando ya la bandera de la traición. Las glorias del Sr. Juárez han sido las del demócrata que se ha encontrado siempre entre las filas del progreso y de la libertad, las del gobernante del pueblo cuyas virtudes republicanas se suponía que eran la garantía más plena de la ley.

Si, pues, el Sr. Juárez es quien ha amenguado su gloria recorriendo el mismo camino que han transitado los hombres que deja tras de sí, yo no he sido sino el mexicano que ha narrado involuntariamente lo que le impone su deber y lo que el gobierno ha dicho elocuentemente con sus hechos; pero aun en este caso las glorias de México quedan inmarcesibles, sin que puedan oscurecerlas los errores de un hombre; sin que puedan empañarlas los escritos de otro.

Mexicanos: he creído haber llenado los compromisos que me contraje para con vosotros. He creído haberlos llenado en los momentos más solemnes de la patria; en los momentos mismos en que ha sido necesario conciliar la prudencia que exige nuestra actual situación, con las medidas que reclama la violación de la ley.

Conciudadanos, creedme, os hablo con el corazón: si a la salvación de mi patria conviene el sacrificio por mi parte, de no pisar ya sus feraces bosques, de no aspirar sus balsámicas auras, de no defender entre vosotros su hermosa bandera, hago con gusto ese sacrificio y con gusto haré también el de buscar una tumba extranjera, si a este precio veo a mi patria dichosa. Por el contrario, si creéis que por la ley os sirva de centro y de bandera, si creéis que mi vuelta a México os aproveche en vez de perjudicaros después de los pasos desacertados que ha dado el gobierno, entonces os pertenezco por deber y por convicción. Obrad con prudencia; pero obrad también cual lo reclama el honor de México y os salvaréis.

San Antonio de Béjar, diciembre 26 de 1865.

Jesús González Ortega

GUILLERMO PRIETO  
EN FRANCA DISIDENCIA FRENTE A JUÁREZ

Presidio del Norte, diciembre 23 de 1865

Sr. Gral. don Lorenzo Vega  
Donde se halle

Querido Lorenzo:

El pronunciamiento del Sr. Juárez en contra de la Constitución para retener el poder supremo, me separó del gobierno como me separé de Comonfort en aquel golpe de estado más disculpable, siquiera por no tener al extranjero invadiéndonos.

Sin rumbo, sin fortuna, con mi familia llena de sufrimientos me dirijo por estos desiertos de Brownsville, siempre amigo de mis amigos y siempre deseoso de servir la causa nacional.

Pronto tocaré el fuerte Clark, o sean las Moras. Allí quisiera tener carta de usted con todas las noticias que pueda darme y ojalá fuese posible nos viéramos.

Soy de usted como siempre, afectísimo seguro servidor q. b. s. m.

Guillermo Prieto

DOMINGO RUBÍ, GOBERNADOR DE SINALOA,  
CONFORME CON LA PRÓRROGA

Concordia, Sin., diciembre 24 de 1865

Sr. presidente licenciado don Benito Juárez  
Chihuahua

Muy señor mío de mi alta consideración y aprecio:

Tengo el honor de contestar su apreciable de fecha 23 del próximo pasado; recibí los paquetes de impresos y cartas para los Sres. Grales. Corona y García Morales; unos y otros han sido despachados a su destino.

Los decretos concernientes a la continuación de usted en el poder, lo mismo que el de la deposición del Gral. González Ortega del puesto que ocupaba y la circular que previene la aprehensión de jefes y oficiales que vengan del paseo que han hecho al extranjero, esté usted seguro que en el estado serán rigurosamente observados; pues tal vez en muy pocos estados se ha tenido más oportunidad que en el de Sinaloa, para considerar como es debido los eminentes servicios de los defensores de la República, tanto cuanto el horrible crimen de los que llamándose soldados, abandonan su patria a la hora de la prueba.

Mucho me congratulo con la venida de usted otra vez a Chihuahua; la nación en esto ve un triunfo y el invasor su humillación y su impotencia.

Por aquí, señor, seguimos trabajando con la misma fe de siempre; nuestras fuerzas guardan su antigua moral y progresan; el enemigo en número de 1,000 franceses y 600 traidores reducido al puerto y nuestras guerrillas le hostilizan hasta en las garitas. Se dice que saldrá a batirnos y

nosotros le esperamos; se asegura también que Lozada viene, lo mismo que más franceses de Durango, pero a todo estamos listos.

Si los Grales. Patoni y Villagra llamaran la atención de una manera eficaz al enemigo, éste encontraría mayores dificultades y no cargaría todo su poder, como lo ha hecho, sobre este estado.

Por carta anterior a la que recibí últimamente de usted, esperaba recursos que nos ofreció y sobre esto no diré a usted más que el dinero, tan escaso entre nosotros, es la peor falta de todos los elementos, en virtud de que en el estado, materialmente es imposible sacarlos. Nuestra situación, señor, en este sentido es desesperada y yo espero que usted hará por su parte cuanto esté a su alcance porque el gobierno nos auxilie.

De cualquier manera soy de usted su obediente súbdito y amigo que atento b. s. m.

Domingo Rubí

DIEGO ÁLVAREZ CONFORME SE ENJUICIE A LOS MILITARES  
QUE SIN AUTORIZACIÓN PERMANECEN EN EL EXTRANJERO

La Providencia, diciembre 25 de 1865

Sr. Presidente de la República, licenciado Benito Juárez  
Chihuahua

Mi querido y respetable amigo:

He tenido el gusto de recibir su grata de 3 de noviembre próximo pasado, imponiéndome por ella de que fueron en su poder la que le dirigí el 27 de agosto y la de igual fecha del señor mi padre, que me dice usted contestará en el próximo correo.

Grande ha sido la satisfacción que me ha causado la desocupación de esa capital por los franceses, porque veo en ello no simplemente una de tantas peripecias de la guerra, sino la demostración de la impotencia del invasor para sojuzgar al país. Felicito a usted, pues, por ese acontecimiento que tanto va a influir en la moral de los pueblos.

Ha sido en mi poder el *Periódico Oficial* en que se encuentra la circular que ordena someter a juicio a los militares que se hallan en el extranjero sin licencia del gobierno. Esta disposición me parece muy justa y una de las que acarreará a usted mayor simpatía entre los defensores de la República, porque, a la verdad, penoso era recibir folletos llenos de brindis patrióticos pronunciados por nuestros militares que, residentes en los Estados Unidos, hacían votos por nuestro triunfo, cuando su deber los llamaba al país. Parecía esto más bien una amarga ironía, un insulto a nuestros sufridos jefes, que desnudos y hambrientos sostienen con tanto brío una lucha tenaz.

El ejército del centro, después de la muerte del Sr. Gral. Arteaga, continúa reorganizándose. El Sr. Riva Palacio se afana en esta tarea. Ha dado el mando de la 1ª división al Sr. Régules, persona la más a propósito para esto y me parece que muy pronto el ejército volverá con nuevo brío a la campaña.

Los invasores de Acapulco continúan encerrados en la ciudad, acosados diariamente por nuestras guerrillas que penetran hasta algunas calles. La fiebre amarilla causa en ellos grandes estragos, de manera que a la fecha apenas contarán con cosa de 250 hombres útiles. Muy raro es el día en que no se presentan en nuestros campamentos uno o dos desertores.

Ya por conducto del Sr. Godoy he trasmitido a usted la noticia del triunfo alcanzado por el Sr. Gral. Díaz al frente de tropas surianas, en el pueblo de Comitlipa del distrito de Morelos, perteneciente a este estado y ahora lo felicito muy cordialmente por ello.

El Sr. Gral. Díaz ha salido de Tlapa el 11 del corriente, dirigiéndose a las Mixtecas. En las operaciones que va a emprender le auxiliarán fuerzas de este estado y no dudo que obtendrá un brillante resultado.

El señor mi padre retorna a usted sus afectuosos recuerdos, suscribiéndome su afectísimo amigo y servidor que lo aprecia sinceramente.

Diego Álvarez

EL GRAL. CORONA CONFORME CON LA PRÓRROGA

Ciudadano Ministro de Relaciones  
Exteriores y Gobernación  
Chihuahua

Las circulares y supremos decretos expedidos por ese ministerio en 28 de octubre y 8 de noviembre, han sido en mi poder.

El buen sentido nacional verá en estas disposiciones el afianzamiento de la suprema autoridad de la nación y la seguridad de que los fieles defensores de la independencia nacional no son confundidos con aquellos que, llevando el nombre de soldados de la república, a la hora de prueba abandonan su bandera marchándose al extranjero.

Estas supremas disposiciones se harán saber, por orden general, a los cuerpos que componen las brigadas unidas de Sinaloa y Jalisco.

Dígole a usted, para que por su digno conducto llegue al conocimiento del supremo magistrado de la nación.

Independencia y libertad, Concordia, diciembre 24 de 1865.

Ramón Corona



RESPETUOSA Y ATENTA CARTA DE PATONI  
CONTRA LA PRÓRROGA

Presidio del Norte, diciembre 15 de 1865

Sr. licenciado don Benito Juárez  
Paso del Norte

Muy respetable amigo y señor:

La circunstancias de estar el enemigo a las puertas de Chihuahua, al entrar y cuando salí de aquella ciudad, lo inoportuno de cualquiera manifestación de mis ideas en los momentos críticos en que nos vimos la última vez y, por último, el propósito de no tomar la iniciativa en la manifestación de mi descontento por el golpe de estado, habiendo personas más caracterizadas que yo que tienen el deber de hacerlo, me hicieron no hablar entonces y me obligan a escribir a usted confidencialmente, sobre un negocio que afecta los intereses nacionales.

No es de mi carácter ni me considero con la instrucción bastante para hacer un análisis de los decretos de 8 de noviembre. Pero por hábil que haya sido la tergiversación de la ley, por diestras y sagaces que sean las inducciones que de su espíritu saca el ministerio, en todo lo que no es el círculo que personalmente quiere alucinar a usted, percibe el ciudadano honrado que la ley se ha despedazado, que no existen en usted títulos bastantes para el ejercicio del poder y que, en lo sucesivo, no queda al país sino la usurpación y los peligros de la anarquía, pudiendo y debiendo seguir con toda majestad y sin perturbación alguna el orden constitucional.

La gran conquista obtenida por el Plan de Ayutla, fue que se considerara para siempre abolida la cuestión de personas; convertida en

una verdad práctica la soberanía nacional, alma del sistema democrático y condenados, por la justa severidad del pueblo, los motines militares en que pueda fabricar, con pretextos más o menos plausibles la ambición sus títulos, para sojuzgar a los pueblos que no pueden resistirla.

Cuando abandoné mis tranquilas ocupaciones y sacrifiqué mi fortuna privada por la adopción de estos principios y para sostenerlos con las armas, en nuestras glorias o en nuestros reveses, lo mismo combatiendo que en el ejercicio del poder, me ha adelantado la idea de que la ley era nuestra égida y de que correspondíamos obedeciéndola, a los votos de la nación. El soldado ciudadano no puede ser instrumento de la destrucción de las leyes; expensado por la nación, no debe traicionar sus intereses; espada del gobierno, no debe servir a los que conspiran contra su existencia.

Para mi modo de ver las cosas, en lo más profundo de mis convicciones, no cabe duda alguna que la retención del poder por parte de usted después del 30 de noviembre, es una usurpación; que el señalamiento por usted de su sucesor, es una herencia desconocida en nuestro código y apenas ensayada por Santa Anna en sus días de mayor aturdimiento y que este conjunto de anomalías exponen al país a la anarquía, debilitándolo y comprometiendo altamente nuestro nombre en el extranjero. Conjuro a usted, Sr. don Benito, por el lustre de su nombre, por la merecida elevación a que lo han conducido sus virtudes y por el bien del país de quien ha sido una firme esperanza y un título de orgullo, a que retroceda del camino que ha emprendido, y en el cual me es de todo punto imposible seguirlo.

Me hago tanta mayor violencia para hacer a usted presente mi resolución, cuanto que estoy seguro que, si recurre a su memoria, recordará que, representante usted de la ley, siempre me ha encontrado de su lado sin una sola vacilación y sin objeción alguna a sus mandatos; que siempre he sido uno de los primeros que he acudido a su defensa y que en los momentos que aun parecía que sus amigos le volvían la espalda, yo tomaba empeño en que se me viese a su lado, identificando mi suerte con la suerte de las instituciones que con tanta fidelidad depositaba usted. Al separarse usted de éstas, me aleja de su persona y no puede usted dejar

de conocer que lo dejo, no por los peligros ni por los accidentes del momento, sino por no traicionar las leyes que usted nos ha enseñado a respetar

Esta manifestación que hago a usted con el mayor respeto y animado de los mejores sentimientos, en nada rebaja mis propósitos de servir a mi patria con la misma lealtad que hasta aquí, de cuantas maneras me sea posible, de unirme a los que combaten contra sus invasores con el mismo esfuerzo que siempre y de combatir por sus derechos hasta verlos completamente revindicados

Prescindiendo de todo lo que pueda interpretarse de una manera desfavorable, sin el más leve deseo de ofender a usted personalmente; por el contrario, no lastimándome lo más leve engañarme en mis presentimientos sobre las consecuencias de lo determinado por usted, cumple a mi lealtad decirle, con la mayor franqueza y antes de contraer con nadie compromiso de ningún género, que no obedeceré ninguna de las disposiciones de usted como gobierno y que defenderé a mi patria, según mis propias inspiraciones, acatando al o los que representen su legitimidad, condición indispensable, en mi juicio, para la salvación de la independencia.

No quiero concluir sin manifestar a usted, independiente de mis deberes oficiales, que en lo personal le estoy agradecido por las atenciones que ha usado conmigo y que con los más sinceros sentimientos de estimación personal, me repito de usted su afectísimo amigo y seguro servidor q. b. s. m.

José María Patoni

## LA PRÓRROGA PRESIDENCIAL ES LA ÚNICA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN

La Providencia, enero 20 de 1866

Al presidente don Benito Juárez

Querido amigo y señor:

Creo que los dos decretos que ha expedido usted el 8 de noviembre último, son justos y necesarios. La prórroga de su término presidencial, mientras tanto las circunstancias del país, invadido hoy por un ejército extranjero, no permitan verificarse nuevas elecciones, es la única solución de las dificultades que se presentan y es una medida que indudablemente está comprendida en las amplias facultades que han concedido a usted los representantes de la nación; ni puede decirse que se opone a la constitución, que previene por lo menos la posibilidad de una elección.

Por otra parte, si hubiese usted entregado aquel puesto al vicepresidente, éste, sin poder tomar posesión legalmente, mientras tanto no sea posible efectuarse nueva elección, como no podrá suceder por algún tiempo, tendría que seguir ocupando la presidencia indefinidamente, cuando el espíritu de la constitución establece que solamente podrá encargarse del poder temporalmente y de una manera provisional. Estas razones, que están bien explicadas en la circular del Sr. Lerdo y la confianza muy merecida de que disfruta usted, han hecho que el decreto citado, que ha mucho tiempo deseaba ya se expidiese, sea muy bien recibido en este estado.

Con respecto a la responsabilidad en que ha incurrido el Gral. González Ortega, nada tengo que añadir a las razones que ha expuesto el

gobierno sobre el particular. A mi juicio, ellas son concluyentes y por mucho que lamente yo los errores de un mexicano que hasta hoy había prestado buenos servicios a su patria, me parece muy justo el decreto.

Juan Álvarez